

EL SISTEMA PENITENCIARIO EN ECUADOR - HISTORIA Y RETOS DE UN EPICENTRO DEL CRIMEN

#PrisionesEcuador





El sistema penitenciario en Ecuador - historia y retos de un epicentro del crimen

Diciembre 2024

Escrito por:

James Bargent

Investigación:

James Bargent, Karol Noroña, y Mathew Charles

Edición:

Steven Dudley y María Fernanda Ramírez

Verificación de datos:

Gavin Voss y Lynn Pies

Gráficos:

Juan José Restrepo, Ana Isabel Rico, y Christopher Newton

Visuales y 3D:

Juan José Restrepo y Daniel Reyes

Dirección creativa:

Elisa Roldán y Juan José Restrepo

Diagramación de PDF:

Ana Isabel Rico



**InSight
Crime**

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
DEL CRIMEN ORGANIZADO



Tabla de contenido

1	Resumen Ejecutivo	5
	Introducción	5
	Hallazgos principales.....	6
	Metodología	8
2	La evolución del crimen organizado en el sistema penitenciario ecuatoriano	10
	El pecado original de Ecuador: leyes punitivas.....	10
	y cárceles superpobladas.....	10
	Un nuevo sistema para viejos problemas	12
	Vaciando el sistema.....	16
	La reforma del mundo criminal ecuatoriano.....	19
	Perder el control	21
	Devolver el genio a la botella.....	26
	El camino hacia la ‘Mano Dura’	28
3	El negocio de las prisiones	30
	El costo de sobrevivir.....	31
	El costo de la prohibición	34
	El costo del dinero	36
	El costo de salir.....	37
	Calculando el costo.....	38
4	Las mafias carcelarias: el eje criminal de Ecuador	41
	El paisaje mafioso	43
	Estructura de las redes mafiosas	45
	Economías criminales.....	49
	Expansión y uso de la violencia	53



El reclutamiento.....	55
Manteniendo el control.....	57
La corrupción y las relaciones estatales	60

5	Desde la intervención:¿Un nuevo comienzo o un nuevo ciclo de criminalidad?	64
----------	---	-----------

6	Perfiles Criminales	70
	Los Choneros	70
	Los Lobos	72
	Los Tiguerones	73
	Los Chone Killers	74
	Los Latin Kings	75

Contenido relacionado	77
------------------------------------	-----------



1

Resumen Ejecutivo



Introducción

En los últimos cinco años, Ecuador se ha visto sumergido en una violencia y un caos criminal sin precedentes. Las raíces de esta crisis de seguridad pueden rastrearse directamente en el sistema penitenciario del país y en las redes criminales que han evolucionado dentro de él.

Las prisiones, moldeadas por una serie de reformas fallidas y la negligencia, corrupción e incapacidad del Estado, proporcionaron un espacio para que estos grupos, conocidos en Ecuador como “mafias”, echaran raíces y crecieran. Pero más que eso, también proporcionaron una base económica para este crecimiento en forma de negocios ilegales multimillonarios que han catapultado a las prisiones como una de las economías criminales más lucrativas de Ecuador.



Alimentadas por estos beneficios, las mafias aprovecharon la oportunidad que les brindaban las prisiones para establecer conexiones con las bandas de la calle y con las élites criminales, lo que facilitó su expansión territorial fuera de las cárceles y les permitió acceder a las altas esferas del crimen organizado, incluido el floreciente comercio transnacional de cocaína.

La competencia por controlar territorios estratégicos y economías criminales entre estas mafias ha disparado las tasas de asesinatos en las calles y una serie de masacres en las cárceles que se han cobrado cientos de vidas. Estas redes criminales también han desestabilizado la democracia del país con tácticas de terror y violencia política.

La crisis de seguridad derivada de las prisiones ha provocado una respuesta de mano dura por parte del gobierno de Ecuador, que declaró un “conflicto armado interno” con grupos “terroristas” y desplegó el ejército en el interior de las prisiones y en las calles. Mientras esto ha desbaratado algunas operaciones de las mafias, ha habido pocas señales de una estrategia para abordar las fallas sistémicas que propiciaron su auge. Y hay indicios de que tanto las mafias como las redes de corrupción se están reconstituyendo y preparando el terreno para un nuevo ciclo de violencia y actividad criminal.

Hallazgos principales

- **Las prisiones de Ecuador se convirtieron en el epicentro del crimen organizado debido a años de fracasos y medidas a medias por parte del gobierno.** Para empezar, las leyes antinarcóticos de mano dura llenaron las cárceles por encima de su capacidad. Los siguientes esfuerzos del Estado por controlar las instalaciones superpobladas crearon vacíos de autoridad, que fueron llenados por redes de corrupción y bandas criminales. Y, después de que la construcción de una serie de “mega cárceles” no consiguiera controlar el caos interno, el gobierno recortó drásticamente el presupuesto operativo y desmanteló el ministerio responsable de su gestión, lo que fue el catalizador para que el sistema cayera por completo en manos de los criminales.
- **La concentración de la población en las mega cárceles aumentó los beneficios de los negocios ilícitos al interior de las cárceles.** Esto convirtió al sistema penitenciario en una economía criminal multimillonaria basada en la explotación de la falta de control estatal y la no prestación de servicios básicos. Estos mercados están dirigidos tanto por bandas como por amplias redes de corrupción, que pueden trabajar



de forma independiente o con las mismas bandas. Las ganancias de esta economía impulsaron la evolución y expansión de las mafias carcelarias, al tiempo que proporcionaron un poderoso incentivo a los actores corruptos para socavar los intentos de reforma.

- ▶ **Las mafias carcelarias crecieron rápidamente reclutando grupos criminales de poca monta y bandas juveniles en las cárceles e integrándolas en federaciones de estructuras criminales semiautónomas que operaban tanto en las prisiones como en las calles.** Los líderes de la mafia pudieron entonces poner estas redes al servicio de las élites criminales. Esto les otorgó un papel único: coordinando y conectando los distintos niveles del crimen organizado.
- ▶ **A través de este proceso, las mafias carcelarias se han establecido como eslabones importantes en la cadena transnacional de suministro de cocaína.** Sin embargo, en su mayor parte, permanecen en el nivel operativo del tráfico, prestando servicios logísticos y de seguridad a narcotraficantes mexicanos, colombianos, europeos y ecuatorianos a título individual.
- ▶ **La cesión de las prisiones a las mafias, el crecimiento de las economías criminales que las financian y las oportunidades de acceso al narcotráfico transnacional generaron una competencia criminal que alimentó altos niveles de violencia dentro y fuera del sistema penitenciario que ha sido difícil de controlar.** El catalizador de este aumento de la violencia fue el vacío de poder dejado por el asesinato del líder de Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, quien había limitado la competencia al integrar numerosos intereses y poderes criminales en una sola red cohesionada por su autoridad individual.
- ▶ **Si bien la intervención militar en las cárceles en 2024 interrumpió la capacidad de las mafias para operar libremente, la evidente falta de estrategias a mediano y largo plazo para abordar los problemas sistémicos en el corazón de la crisis carcelaria o desmantelar el negocio de las prisiones hace que sea muy probable que las redes de crimen organizado y corrupción restablezcan sus operaciones dentro de las prisiones.** Además, el debilitamiento de los lazos de liderazgo entre las prisiones y las calles ha acelerado una tendencia hacia la atomización de las mafias, lo que ha llevado a un aumento de las disputas territoriales y de las actividades criminales depredadoras fuera de las prisiones, que afectan principalmente a las comunidades económicamente más desfavorecidas y marginadas de Ecuador.



Metodología

Para llevar a cabo la investigación para este informe, InSight Crime formó un equipo que incluía un coordinador de proyecto, un director de proyecto y dos investigadores consultores basados en Ecuador y Colombia. Como primer paso, el equipo revisó fuentes abiertas, incluidos informes académicos, gubernamentales, de medios de comunicación y de derechos humanos. También llevó a cabo entrevistas virtuales con expertos y funcionarios del gobierno y presentó solicitudes de información para obtener datos e información inicial sobre el sistema penitenciario de Ecuador.

En marzo, el equipo asistió a la Conferencia Internacional de Consenso Sobre Seguridad Penitenciaria y Ciudadana en Ecuador, un evento organizado por la Unión Europea (UE) junto con organismos gubernamentales nacionales e internacionales y agencias internacionales. En el evento, el equipo escuchó a destacados funcionarios y expertos en seguridad, justicia y prisiones, y asistió a mesas redondas sobre los problemas que afectan al sistema. Durante su estancia en Quito, el equipo también se reunió con funcionarios y exfuncionarios del gobierno, de seguridad e inteligencia, periodistas, analistas de seguridad, académicos y otros expertos.

En los meses siguientes, el equipo llevó a cabo investigaciones de campo en profundidad en Quito, Guayaquil, Manta y Esmeraldas, llevando a cabo más de 110 entrevistas. Aunque el acceso a las prisiones estuvo limitado por las restricciones gubernamentales impuestas a principios de 2024, entrevistamos a múltiples ex-presos y familiares de personas privadas de libertad (PPLs), y nos comunicamos con PPLs por teléfono y mensajes de texto. Estas fuentes proporcionaron información sobre las condiciones y la vida cotidiana en las prisiones y las actividades de las bandas y los funcionarios corruptos dentro del sistema. También entrevistamos a funcionarios y exfuncionarios con experiencia en todo el sistema penitenciario, entre ellos varios directores de prisiones, que dieron testimonios de primera mano sobre la corrupción, las fallas sistémicas y el poder del crimen organizado dentro del sistema penitenciario. Tanto los presos como los funcionarios proporcionaron testimonios presenciales sobre algunas de las peores atrocidades que han tenido lugar en las prisiones en los últimos años.

También entrevistamos a miembros y asociados de organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Latin Kings y Los Ñetas, quienes ofrecieron información sobre las operaciones y estructura actuales, y la historia y evolución de estas organizaciones. Las entrevistas con fuentes de seguridad, inteligencia, judiciales y gubernamentales proporcionaron relatos



sobre los mismos temas desde la perspectiva del Estado. Las y los líderes comunitarios, víctimas del crimen organizado y residentes de áreas en las que los grupos criminales tienen una fuerte influencia proporcionaron relatos sobre cómo la violencia y la criminalidad se han desbordado desde las prisiones hasta las calles. Por último, expertos de la sociedad civil, incluidos académicos, analistas de seguridad, periodistas y defensores de los derechos humanos, aportaron contexto e historia. Estas entrevistas se complementaron con fuentes documentales, como expedientes judiciales, informes de inteligencia e informes gubernamentales.

En este informe, calificamos a las fuentes para permitir una mejor evaluación de la autenticidad de la información proporcionada. Sin embargo, debido a los niveles de violencia en Ecuador y a las amenazas personales y profesionales a las fuentes y sus familias, la mayoría de las fuentes accedieron a hablar sólo bajo condición de anonimato. InSight Crime también intentó organizar entrevistas con docenas de fuentes que, al final, se negaron a hablar por temor a represalias. Por lo tanto, si en el texto no se identifica a la fuente por su nombre y cargo, se debe asumir que solicitó el anonimato.

El informe se divide en cinco secciones. La primera recorre la historia del sistema penitenciario y de la evolución del crimen organizado dentro de él. La segunda desglosa cómo las prisiones se han convertido en una de las principales economías criminales de Ecuador. La tercera sección analiza las estructuras y operaciones internas y externas de las mafias carcelarias que se han posicionado en el centro del mundo criminal ecuatoriano. La cuarta ofrece un recuento y análisis de los acontecimientos desde inicios de 2024, cuando el gobierno lanzó una intervención militar en las cárceles y en las calles. Y la quinta y última sección ofrece breves perfiles de las mafias carcelarias más importantes que operan en la actualidad.



2

La evolución del crimen organizado en el sistema penitenciario ecuatoriano



El pecado original de Ecuador: leyes punitivas y cárceles superpobladas

Los orígenes de la crisis penitenciaria de Ecuador se remontan a la promulgación de una de las leyes sobre drogas más punitivas del hemisferio occidental. En 1991 se introdujo [la Ley 108¹](#) que equiparaba los delitos relacionados con drogas a crímenes como el asesinato, el robo a mano armada, la violación y el secuestro,

¹ El enlace remite a la versión modificada de la ley en 2004



y establecía penas mínimas obligatorias de 10 años para cualquiera que fuera sorprendido en posesión de sustancias ilegales, sin importar la cantidad. También introdujo el principio de “inversión de prueba”, por el que se consideraban culpables a los acusados de delitos de drogas a menos que pudieran demostrar su inocencia.

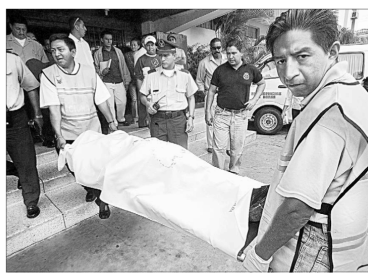
Las prisiones del país empezaron a llenarse de traficantes de droga de poca monta. Cuando una comisión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llevó a cabo una [misión internacional de observación](#) en 2000, encontró más de 8.500 presos en un sistema construido para albergar a menos de 6.000. Más de un tercio de las PPLs estaban acusadas de delitos de drogas.

La FIDH condenó al sistema por su infraestructura en ruinas, las pésimas condiciones sanitarias, la insuficiente atención médica, la alimentación inadecuada y la escasez de programas educativos y de rehabilitación. También alertó de la corrupción generalizada y documentó cómo los guardias introducían a las prisiones contrabando, incluyendo drogas, cobraban a las PPLs por servicios básicos —como acompañarles a citas médicas o audiencias judiciales—, y les vendían mejores condiciones de vida.

Los sospechosos del crimen de Enriquez están en la Penitenciaría

GUAYAQUIL Un desconocido le disparó al Director del presidio por más de diez ocasiones cuando salía a su trabajo en su vehículo. La Policía tiene varias pistas.

REDACCIÓN GUAYAQUIL. La permanente requisita de armas y drogas dentro de la Penitenciaría del Litoral es, al parecer, el principal motivo por el cual ayer fue asesinado su director, Eddy Enriquez Salto, con ocho balazos. El crimen ocurrió a las 08:00 cuando el funcionario, de 36 años, salió de su domicilio en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil, para dirigirse a su trabajo, en su auto Hyundai Elantra, color verde, de placas GMU-352. Según testigos, Enriquez no había recorrido ni 80 metros de la manzana 08 donde habitaba, cuando un desconocido de cabello claro se le acercó a pie por el frente y le disparó por más de diez ocasiones. Tres proyectiles impactaron en el parabrisas delantero del auto y dos en el capó. Ocho de las balas hirieron al funcionario en el abdomen, tórax, cuello, rostro y brazos. El atacante, según murado-



EN LA CLÍNICA LA ALBORADA • En la casa de salud se constató la muerte de Eddy Enriquez.

El director de la prisión de Litoral, Eddy Enriquez, fue asesinado en 2005. Crédito: El Comercio

A principios de los 2000, los presos empezaron a organizarse contra las malas condiciones. Hubo [motines y huelgas de hambre](#) y empezaron a gestarse las primeras formas de autogobierno, como los comités de presos. Al mismo tiempo, los miembros de las bandas encarcelados, sobre todo aquellos procedentes del mundo criminal de Guayaquil, ganaban poder en el sistema, traficaban y vendían drogas, alcohol y armas, y extorsionaban a otros reclusos, según informes de medios de comunicación de la época. Estas bandas también empezaron a desafiar el control

de las autoridades, al asesinar a dos directores de la prisión más grande de Guayaquil cuando tomaron medidas para limitar sus operaciones: el primero [en 2005](#), el segundo [en 2007](#).

Dos meses después del segundo asesinato, el nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa, [declaró el estado de emergencia](#), y calificó al sistema penitenciario como una “bomba de tiempo”. Correa anunció que su gobierno construiría un sistema penitenciario totalmente nuevo, basado en la rehabilitación.



“No se necesita más represión, sino más justicia, más igualdad, más oportunidades”, declaró a la prensa.

Sin embargo, cuando terminó la presidencia de Correa, 10 años después, sus reformas no habían creado un nuevo sistema, sino un nuevo negocio criminal.

Un nuevo sistema para viejos problemas

Correa imaginó un sistema penitenciario con instalaciones nuevas y modernas. Estas prisiones se vaciarían de personas que cumplieran largas condenas por delitos menores relacionados con drogas y se reduciría al mínimo el número de personas en prisión preventiva. El resto de las PPLs serían cuidadosamente divididas por nivel de riesgo y se les darían todas las oportunidades para participar en programas de rehabilitación.

Las reformas prometidas tardaron en ponerse en marcha, y el hacinamiento continuó, alcanzando un pico histórico en 2012, cuando el sistema penitenciario estaba un 74% por encima de su capacidad, según las [estadísticas oficiales](#). El gobierno de Correa reaccionó atacando el problema desde ambos flancos, tomando medidas para aumentar la capacidad del sistema y, al mismo tiempo, reducir el tamaño de la población.

El gobierno construyó tres nuevos centros de detención: Latacunga en Cotopaxi, Turi en Cuenca y La Regional en Guayaquil. Y renovaron las instalaciones de 50 años de la mayor prisión del país, la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. En 2013, [el sistema](#) podía albergar a 29.000 reclusos. Y en los años siguientes, más de la mitad de la población carcelaria estaría recluida en una de las cuatro “mega cárceles”, como empezaron a conocerse.



President Rafael Correa reviews plans for a new prison. Credit Presidencia Ecuador



El gobierno de Correa se propuso retroceder las leyes draconianas que llenaban las cárceles. En 2014, aprobó el [Código Orgánico Integral Penal \(COIP\)](#). La ley despenalizaba la posesión personal de drogas e introducía directrices de sentencia más indulgentes que tenían en cuenta las cantidades de droga implicadas en un caso. También distinguía entre productores, traficantes y consumidores, así como entre criminales violentos y no violentos. El código se aplicó con carácter retroactivo, lo que supuso [la rápida puesta en libertad de más de 2.200 personas](#).

El gobierno también introdujo un nuevo sistema de rehabilitación para romper el ciclo de encarcelamiento, puesta en libertad y reincidencia. Las PPLs podían progresar a través de diferentes niveles de regímenes de seguridad y conseguir la libertad anticipada, completando programas en áreas como el trabajo, la educación, la cultura y el deporte. Si completaban los programas y superaban las evaluaciones pertinentes, podían solicitar la libertad condicional tras cumplir el 60% de su condena.

Se suponía que el progreso de las PPLs se seguiría a través de una nueva plataforma digital del Sistema de Gestión Penitenciaria (SGP), que también controlaría los datos de los presos, desde su salud hasta las visitas que recibían.

Los primeros resultados parecían prometedores. [Las cifras oficiales](#) mostraban que, en 2014, las tasas de hacinamiento se habían desplomado, y que las prisiones estaban al 100% de su capacidad. La violencia también se redujo: el número de muertes por cada 10.000 presos cayó un 87% entre 2010 y 2014.

Sin embargo, los avances estadísticos encubrían peligrosas fallas y defectos del nuevo sistema.

Al no cumplir con todas las medidas de su prometida reforma penitenciaria — salvo las primeras —, el gobierno de Correa no desactivó la crisis penitenciaria de Ecuador. Por el contrario, la preparó para explotar.

Para empezar, las nuevas prisiones estaban mal construidas. Antiguos funcionarios consultados por InSight Crime dijeron que abundaban los rumores de corrupción en el proceso de contratación y construcción, y aunque no han salido a la luz casos concretos, había un patrón de irregularidades sospechosas.

Una [auditoría gubernamental](#) de la construcción de la prisión de Latacunga completada en 2020, por ejemplo, reveló una importante mala gestión e irregularidades, incluidos millones de dólares en gastos excesivos, pagos injustificados, obras no autorizadas, contratación de personal no calificado y fallas en la introducción de información crucial en los registros de contratación pública. Cuando se inauguró la prisión en 2014, ni siquiera tenía suministro de agua.



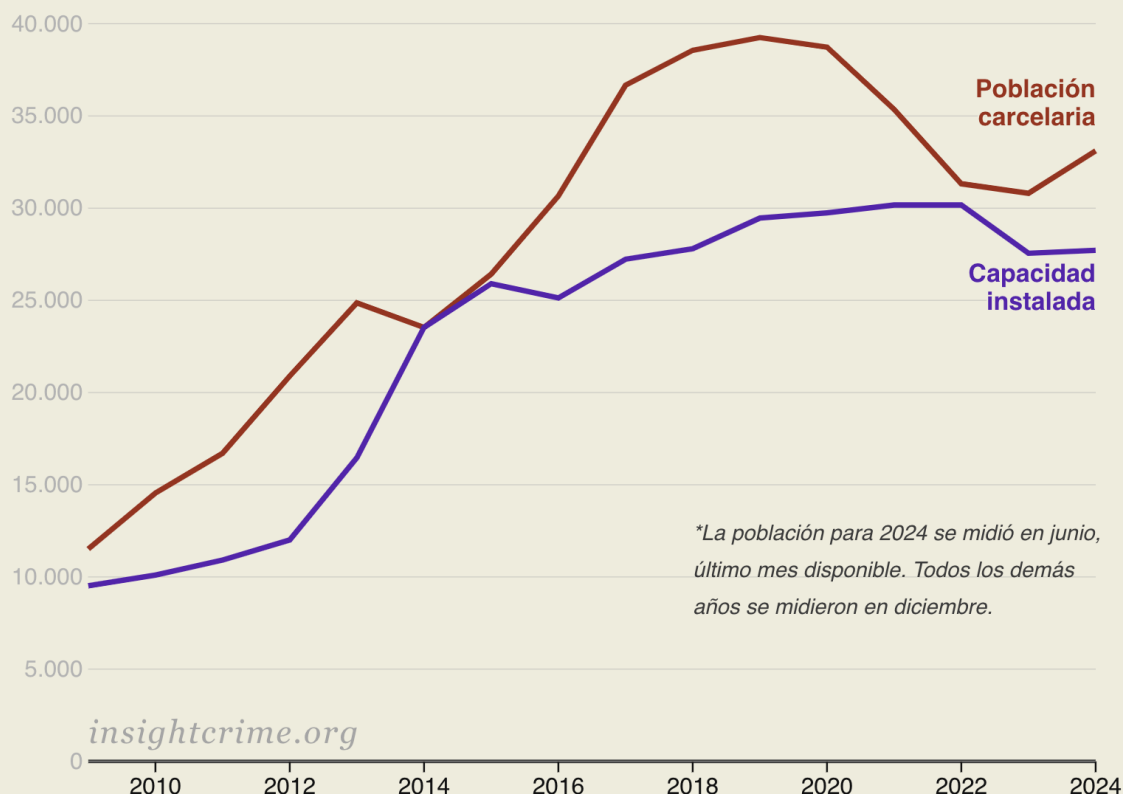
Entre los beneficiarios de los contratos para llevar a cabo las obras de las prisiones figuraba un importante donante del partido político Alianza PAIS de Correa, y que fue **nombrado** en conexión con una importante investigación de soborno en el sector privado. Además, el funcionario que supervisó el proceso de construcción fue acusado con **110 elementos de convicción de enriquecimiento ilícito** derivados de su paso por varios cargos ministeriales que ocupó posteriormente.

Algunas prisiones carecían también de los servicios más básicos, como agua corriente, gestión de residuos y atención médica. La deficiencia más llamativa era la alimentación, que las PPLs y sus defensores, así como observadores independientes, funcionarios de prisiones e investigaciones gubernamentales, han denunciado sistemáticamente por insuficiente, insalubre y, en ocasiones, incomedible.

La población carcelaria de Ecuador ha superado sistemáticamente la capacidad instalada del sistema

Hacinamiento en las cárceles de Ecuador

Noviembre 2024 | Fuentes: Registros públicos del Servicio de Atención Integral para Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y datos obtenidos por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador





El gobierno tampoco cumplió muchas de sus promesas de reforma. No se hizo ningún esfuerzo serio, por ejemplo, para dividir a los presos por riesgo para la seguridad. Y cinco años después de la apertura de las mega cárceles, los detenidos en prisión preventiva seguían representando más de un tercio de la población, según las estadísticas oficiales.

Los defectos del nuevo sistema no tardaron en agravarse cuando, bajo presión política por su enfoque supuestamente indulgente con el consumo de drogas, el gobierno volvió a [revisar](#) las directrices de imposición de penas, endureciéndolas y reduciendo los umbrales utilizados para distinguir entre los distintos niveles de narcotráfico. Las nuevas mega cárceles de Ecuador se llenaron rápidamente, y las [prisiones](#) en su conjunto pasaron de 102% de capacidad a 122% de capacidad en el año después de la introducción de las reformas, según las estadísticas del gobierno.

Para la mayoría de las personas hacinadas en estos espacios, los programas de rehabilitación prometidos nunca se materializaron debido a la falta de financiación, espacio, personal y equipamiento. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ([CIDH](#)), solo la mitad de las PPLs pudo acceder a algún programa.

Incluso para los que pudieron, el seguimiento de sus progresos se complicó por las fallas del nuevo sistema de gestión del SGP. Según un [diagnóstico](#) del sistema penitenciario realizado por Kaleidos, un centro de investigación etnográfica, el sistema estaba lleno de errores, falta de información y registros duplicados. Los documentos de salida no eran procesados, dejando a la gente varada en la cárcel. Los registros de las prisiones se perdían en el sistema, lo que hacía imposible saber quién, cuántos y dónde estaban detenidos.

“Decíamos [a la dirección de la cárcel] ¿cómo es posible que no sepan dónde está una persona? En otras palabras, ¿cómo es posible que llegues a ese nivel de mal uso de la información, que no tengas actualizado absolutamente nada?”, dijo un antiguo funcionario del departamento de asesoría jurídica de las autoridades penitenciarias.

Se suponía que el acceso al sistema era limitado, pero cuando la división de servicios de asesoría jurídica del sistema penitenciario revisó su uso, descubrió que numerosos funcionarios no autorizados tenían acceso. El antiguo funcionario de la división también oyó rumores de que los propios presos tenían acceso. InSight Crime no pudo corroborar esta historia.



Los disturbios se extendieron. En 2015, estallaron disturbios en Latacunga, con presos que ocuparon la azotea del edificio y exigieron conversaciones con el gobierno sobre sus malos tratos. En lugar de negociar, el **levantamiento fue sofocado** por la fuerza. A pesar de la dureza de la respuesta, supuso un paso más hacia la pérdida de control del sistema por parte del Estado. Los guardias de prisiones contarían más tarde a los investigadores del gobierno que estaban desarrollando un informe sobre el sistema que, en su desesperación por preservar la imagen de un sistema funcional y reformado, recurrieron a las bandas para imponer el orden a la población general.

“Hubo mucho de indignación [entre las PPLs], pero luego fue capitalizado por el crimen organizado”, dijo una exfuncionaria del gobierno que investigó el sistema penitenciario para el Congreso. “Y cuando esto sucedió, luego vinieron los acuerdos, acuerdos por debajo de la mesa sobre quién maneja las prisiones”.

Vaciando el sistema

Cuando la presidencia de Correa terminó en 2017, la realidad estaba muy lejos de la visión audaz y progresista que había trazado. Y las cosas estaban a punto de empeorar. En 2017, el presidente Lenín Moreno sustituyó a Correa. Rápidamente, el ya frágil control del Estado sobre las prisiones se vio aún más debilitado por las radicales reformas estructurales dirigidas a lo que **Moreno denunció** como los ministerios “mimados” e innecesarios de la era de Correa.

Se disolvió el ministerio responsable del sistema, el Ministerio de Justicia, y la administración penitenciaria pasó a un nuevo organismo: el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Al mismo tiempo, el presupuesto para el sistema se redujo de US\$117 millones en 2017, a US\$91 millones en 2019, de acuerdo con documentos internos del SNAI obtenidos por InSight Crime.

También hubo problemas con el SNAI. La entidad no forma parte de un ministerio y, por tanto, no puede defender políticas. Exfuncionarios de prisiones, investigadores del gobierno, analistas de seguridad y académicos que trabajan en el tema describieron a InSight Crime cómo esto debilitaba la coordinación de la recopilación de inteligencia, limitaba su capacidad para obtener recursos y eliminaba una voz importante de los debates a nivel de gabinete en relación con la política.



El informe de la CIDH concluiría posteriormente que la reforma supuso un “desmantelamiento del sistema penitenciario” y que desde la creación del SNAI no había “funciones bien definidas, líneas claras de dirección, política penitenciaria, o mecanismos de rendición de cuenta”.

Los problemas del SNAI se agravaron en 2017 con el cierre de la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios, que se había inaugurado solo dos años antes. La falta de centros de formación y los recortes presupuestarios provocaron una reducción de las plantillas penitenciarias. En 2019, el sistema contaría con poco más de 1.500 guardias, más de 6.400 menos de los que se necesitarían para cumplir con los estándares internacionales, según los medios de comunicación de la época. Para suplir esta carencia, el SNAI contrató a actuales y antiguos miembros de las fuerzas del orden y militares, que no estaban capacitados para trabajar en prisiones.

El SNAI también adolecía de malas prácticas de contratación. Antiguos funcionarios afirmaron que las prácticas de contratación iban de descuidadas a corruptas, y que el personal calificado, con conocimientos y experiencia, era la excepción. En una audiencia de la Asamblea Nacional sobre las prisiones, los representantes cuestionaron los casos de presunto nepotismo.

Fue la sentencia de muerte para la rehabilitación. La nueva visión era mucho más simple: contención. Siguió la negligencia.

“¿Cómo les pones a cuidar con enfoque de derechos humanos al que cree que esa persona no es rehabilitable, y no le da esperanza? [Para el SNAI] mételos ahí, reclúyelos y exclúyelos”, dijo el exfuncionario, que pasó a trabajar con el SNAI tras concluir la investigación del Congreso.

El gobierno de Correa había construido un sistema que no podía administrar ni controlar, y luego, con la disolución del Ministerio de Justicia y la creación del SNAI, el gobierno de Moreno lo había destripado. Al hacerlo, no solo habían creado un sistema penitenciario fallido, sino también un negocio de dimensiones asombrosas, ya que cada vacío dejado por el Estado fue llenado por redes de corrupción y crimen organizado.

las PPLs se veían obligadas a pagar a funcionarios corruptos o a bandas por comida, asistencia sanitaria, visitas y un lugar donde dormir. Periódicamente se cobraban tasas de protección. Los presos también tenían que pagar para acceder a los programas de rehabilitación que necesitaban para obtener la libertad anticipada. Después volvían a pagar para registrar su asistencia y tramitar su documentación. Tenían que pagar para ser trasladados entre prisiones y para que sus formularios de excarcelación no se “perdieran” o se “extraviaran”. Y eran un mercado cautivo de drogas, alcohol, teléfonos celulares, sexo y todo tipo de productos de contrabando.



Cada preso representaba una fuente de ingresos tanto para los funcionarios corruptos como para las bandas. Y con el nuevo sistema, miles de ellos se concentraron en unas pocas instalaciones, convirtiendo el negocio penitenciario en una de las economías criminales más lucrativas de Ecuador.

Las bandas que operaban en las prisiones se enriquecieron y empoderaron con este negocio emergente. Sin embargo, en un principio, el equilibrio de poder seguía estando en manos del Estado. La población criminalmente mezclada dejaba a las autoridades un papel decisivo como último árbitro del poder entre facciones rivales divididas entre la población en general. Según un líder local juvenil de la banda Los Ñetas que estuvo encarcelado durante este tiempo, los guardias tenían un papel en la designación de los comandantes de pabellón, ya que podían simplemente trasladar a cualquier jefe que no cooperara a un sector diferente y nombrar a un sucesor. Y aprovechaban este poder para obtener beneficios económicos.



Drogas incautadas en una prisión ecuatoriana. Crédito: Ministerio de Gobierno de Ecuador

“Si un pabellón quería intimidar a los guías, los guías hablaban con sus superiores y mandaban a cambiar a los cabecillas de esa banda. Automáticamente, ese pabellón lo podía coger otra persona que tuviera el recurso porque se llama comprar pabellón”, explicó. “Si tú tenías el recurso, lo comprabas y comenzabas a poner tus reglas en ese pabellón, pero regido bajo el sistema carcelario”.

Así pues, aunque las autoridades penitenciarias no tenían capacidad para controlar el sistema penitenciario en su conjunto, sí mantenían suficiente influencia para controlar las lucrativas economías ilícitas que había en su interior. Pero paralelamente a la revisión de las prisiones, el mundo criminal de Ecuador estaba experimentando una transformación radical que inclinaría la balanza hacia la otra dirección.



La reforma del mundo criminal ecuatoriano

Las redes criminales que se apoderarían del sistema penitenciario ecuatoriano se conformaron a partir de una convergencia de bandas, organizaciones criminales más grandes conocidas en Ecuador como mafias, y el narcotráfico transnacional. En el centro de esta convergencia se encontraba un grupo: Los Choneros.



Rasquiña fue recapturado nueve meses después de escapar. Crédito: Ministerio de Gobierno de Ecuador

Los Choneros surgieron en la década de 1990 en el estado de Manabí, donde llevaban a cabo robos, secuestros, extorsiones y sicariato. A medida que el grupo evolucionó hasta convertirse en una mafia, también empezó a proveer servicios locales a las redes transnacionales de narcotráfico. Sin embargo, a principios de la década de 2010, la banda estaba debilitada y gran parte de sus miembros habían muerto o habían sido encarcelados. Entre los detenidos se encontraban sus principales líderes: Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, y su lugarteniente José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

En 2013, ambos se fugaron de la prisión de máxima seguridad La Roca. Pero, tras ser recapturados, Los Choneros iniciaron una espectacular evolución hacia una red carcelaria de alcance nacional.

Esta nueva versión de Los Choneros fue ensamblada a partir de una federación de estructuras criminales existentes que operaban bajo el liderazgo de Los Choneros. La fuerza motriz era Rasquiña, quien se hizo famoso en el submundo ecuatoriano por su capacidad casi mítica de unir intereses criminales y mantenerlos en línea.

Rasquiña lo hizo ofreciendo a otros grupos conexiones criminales y los beneficios de una red integrada, que incluía acceso a drogas, armas, dinero y conexiones estatales. Los Choneros también reclutaron en gran medida a las bandas juveniles, sobre todo a Los Ñetas, una banda transnacional que había surgido del sistema penitenciario puertorriqueño antes de convertirse en un grupo pan-latino. Los Choneros dieron a los líderes de las bandas locales una autonomía considerable.



El acuerdo fue beneficioso para todos: Los Choneros consiguieron un ejército criminal y las bandas pasaron a formar parte de una sofisticada federación considerablemente más alta en la pirámide del crimen organizado. De este proceso nacieron la mayoría de las mafias más conocidas de Ecuador, como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers .

Esta nueva coalición amplió el poder y el alcance de Los Choneros, tanto en las cárceles como en las calles. Además, esta nueva federación estaba en condiciones de aprovechar los cambios en el comercio transnacional de la droga que inundaría a Ecuador del dinero procedente de la cocaína.

Para entonces, las redes [mexicanas](#) y [colombianas](#) que habían convertido a Ecuador en un corredor clave para el transporte de drogas a Estados Unidos a finales de la década de 2000 y principios de 2010, se habían visto debilitadas por las operaciones policiales internacionales y se estaban retirando del país. Al mismo tiempo, el auge [del mercado de la cocaína en Europa](#) —y el creciente uso del [transporte marítimo de contenedores](#) para llegar a él— estaba convirtiendo a la ciudad y el puerto de Guayaquil en unpreciado territorio criminal, que atraía a traficantes europeos a Ecuador, sobre todo a redes de origen [albanes](#). Para colmo, la producción de cocaína en Colombia iniciaba [un espectacular y sostenido repunte](#) y pronto alcanzaría niveles récord. En el centro de esta subida se encontraba la región colombiana fronteriza con Ecuador.

Este nuevo panorama representaba una oportunidad histórica para los emprendedores traficantes ecuatorianos: había más cocaína que nunca para mover, un vacío dejado por los mexicanos y colombianos que traficaban por las rutas hacia Estados Unidos, y la oportunidad de hacer tratos con socios criminales europeos que buscaban aumentar el flujo de drogas hacia Europa.

En esta brecha entró [una nueva generación de criminales ecuatorianos](#) que, con el tiempo, pasaron de ser meros proveedores de servicios de redes extranjeras a traficantes por derecho propio. Varios de ellos se asociaron con las mafias para obtener poder armado y servicios logísticos, según dijeron a InSight Crime funcionarios de inteligencia y miembros de las bandas.

Estas nuevas asociaciones convirtieron a las mafias de sicarios en componentes integrales de las redes de narcotráfico, que coordinaban directamente el almacenamiento y el transporte de la droga. Poco después, los líderes mafiosos más ambiciosos empezaron a exigir el pago en drogas, que añadían a los envíos, y con lo que se abrieron un espacio en el comercio transnacional, según una fuente de Los Choneros.



Al frente de esta transformación estaban Los Choneros. Con su nueva fuerza criminal y financiera, la federación de Los Choneros empezó a utilizar las conexiones criminales locales preexistentes y la experiencia de sus facciones para introducirse en nuevas zonas del país. Se centraron especialmente en los territorios del narcotráfico a lo largo de la costa del Pacífico y en corredores estratégicos del interior.

Al mismo tiempo, la federación empezó a arrebatarse a las autoridades el control de las prisiones. Algunas de estas medidas adoptaron un tono tradicional: los guardias y funcionarios aceptaban sobornos y se convertían en adjuntos o miembros de la federación, de lo contrario se enfrentaban a repercusiones potencialmente violentas. La creación de una federación también socavó la influencia que antes tenían los guardias. Al tratarse de una federación única, las amenazas de los guardias de socavar los liderazgos al cambiar a los líderes de pabellón ahora quedaban vacías.

“Con el tema de las uniones [entre grupos criminales] ya no servía de nada que te cambiaran de pabellón, porque es la misma mafia”, dijo un líder de Los Ñetas.

Perder el control

Presos, miembros de bandas y funcionarios de prisiones de todo el país coinciden en que esta transición fue gradual. Pero finalmente, todas las grandes cárceles acabaron en el mismo punto: los funcionarios y los guardias entregaron las llaves a las bandas de las prisiones.

Esta transición entró en su fase final en 2019. Comenzó con los esfuerzos de Los Choneros por eliminar a sus principales rivales en el sistema penitenciario, una coalición de bandas guayaquileñas que operaban bajo el liderazgo de William Humberto Poveda Salazar, alias “El Cubano”. Los Choneros se habían disputado el control de las prisiones con estas bandas desde que ingresaron al sistema, pero en mayo de este año, escalaron el conflicto tras [asesinar a un importante líder](#) de las bandas, y al [hermano de El Cubano](#) en enfrentamientos que dejaron seis muertos. Luego, en junio, [mataron a El Cubano](#), a quien decapitaron y quemaron dentro de la cárcel La Regional de Guayaquil.

En un intento desesperado por restablecer el orden, el gobierno de Moreno comenzó a trasladar a líderes criminales a otras prisiones. En total, [83 altos mandos fueron](#) trasladados a centros de máxima seguridad. Pero la estrategia resultó contraproducente, ya que extendió la influencia de las mafias por todo el sistema penitenciario y [dio lugar a ramificaciones y guerras de poder](#). Al final,



esta fase del conflicto entre Los Choneros y la coalición, que para entonces había adoptado el nombre de Los Lagartos, fue resuelta en su mayor parte por las propias bandas. En agosto de 2020, Los Choneros lanzaron un ataque contra los Lagartos en Litoral que dejó 11 muertos. Los Lagartos restantes depusieron sus armas y negociaron su traslado a un pabellón más aislado de la prisión. Con este acuerdo, Los Choneros consolidaron su control sobre las instalaciones principales, mientras que los Lagartos recibieron una base desde la que podían operar, protegidos de sus enemigos.

La batalla en las prisiones se reflejó en las calles, ya que facciones de la federación de Los Choneros libraron una guerra contra las bandas de Los Lagartos y sus aliados en corredores estratégicos de Guayaquil.

“Se traspoló lo que pasaba en las calles a las cárceles y viceversa, porque desde las cárceles daban órdenes de cometer esas muertes, sicariatos, y crímenes de afuera”, dijo un exfuncionario de policía con experiencia en la lucha contra el narcotráfico y en las cárceles.

La lucha pronto involucró a las esferas más altas del crimen organizado. En 2019, un traficante considerado uno de los principales puntos de contacto ecuatorianos del Cartel de Sinaloa fue asesinado en una prisión donde, según un funcionario de inteligencia militar, había estado bajo la protección de una facción de Los Choneros. Meses después, miembros de su red fueron asesinados en una masacre en otra prisión dominada por Los Choneros. Ese mismo año, también fue asesinado otro capo de una región de tráfico que había sido identificado previamente como operador del Cartel de Sinaloa.



La Nueva Generación fue una alianza de antiguas facciones Choneras. Crédito: Primicias

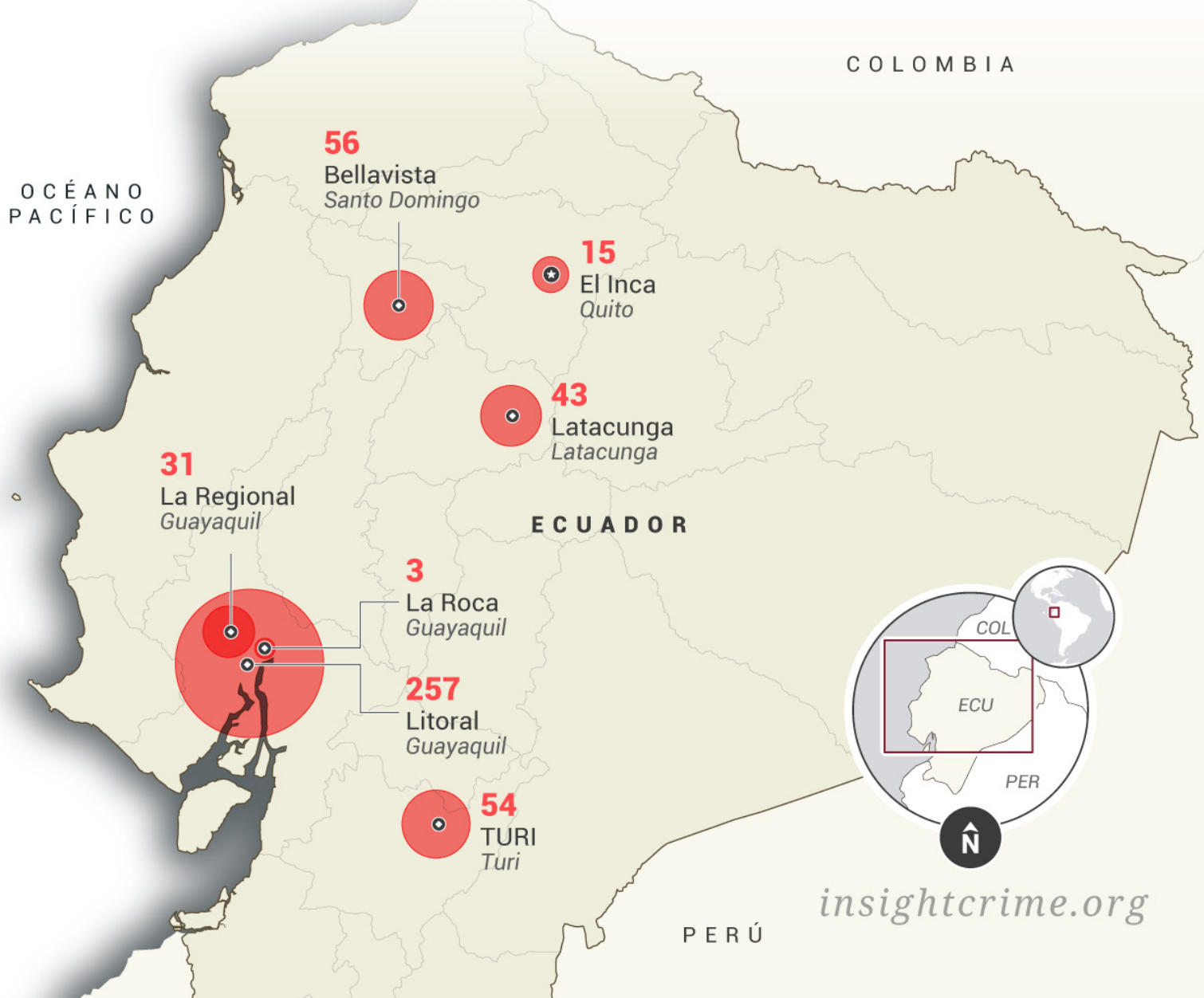
Aunque los asesinatos siguen sin resolverse, funcionarios y exfuncionarios de inteligencia y fuentes criminales dijeron a InSight Crime que Los Choneros estaban detrás de la violencia. La estrategia de Rasquiña, según un funcionario de inteligencia, era eliminar a los narcotraficantes ecuatorianos que trabajaban con los mexicanos para poder subir de nivel y pasar de ser un proveedor de servicios a negociar directamente con los Carteles. La inestabilidad generada



por las ambiciones de Rasquiña se exacerbó con el avance del **Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)**. Mientras que anteriormente el Cartel de Sinaloa dominaba todas las rutas hacia Estados Unidos, la aparición del CJNG creó nuevas oportunidades para que las mafias y las redes de traficantes accedieran al comercio transnacional de drogas, y dio lugar a nuevas rivalidades y competencia criminal.

MASACRES EN LAS PRISIONES DE ECUADOR 2021-2023

Diciembre 2024 | Fuente: Ministerio de Defensa de Ecuador





En octubre de 2020, Rasquiña [fue puesto en libertad](#) de forma controvertida. (El juez fue [acusado posteriormente](#) de corrupción). Para entonces, Rasquiña y Los Choneros parecían estar en la cima del poder en el mundo criminal ecuatoriano, y parecían preparados para dar los siguientes pasos hasta convertirse en componentes clave de la cadena transnacional del narcotráfico. Pero, dos meses después, Rasquiña fue asesinado en un centro comercial de la ciudad de Manta.

Tras su asesinato, la federación de Los Choneros se dividió en amargas y violentas disputas. Había dos facciones: Fito y un ambicioso lugarteniente de Los Choneros, Junior Roldán, alias “JR”, reclamaron el manto como nuevos líderes de Los Choneros; las mafias antes aliadas, Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers formaron un nuevo polo de poder criminal. Los rivales emergentes, respaldados y financiados por narcotraficantes, entre los que destacaba un antiguo Ñeta llamado Leandro Norero, se autodenominaron Nueva Generación.

El 23 de febrero de 2021, el conflicto estalló durante dos días de forma simultánea en cuatro prisiones, con un saldo de 79 muertos. La violencia fue desencadenada por un fallido intento de [asesinato](#) contra Fito en La Regional, pero se extendió a otras prisiones cuando los líderes de la mafia aprovecharon la oportunidad para purgar a sus rivales. La violencia redibujó el mapa territorial dentro del sistema penitenciario y abrió paso a una nueva dinámica. Dejó a los dos actores más poderosos, Los Choneros y Los Lobos, en pleno control de las prisiones en sus bases de operaciones y bastiones regionales —Rodeo, en Manabí, en el caso de Los Choneros y Turi, en Cuenca, en el caso de Los Lobos—. También controlaban las prisiones que se convertirían en sus centros de mando en la guerra que se avecinaba —La Regional en Guayas en el caso de Los Choneros y Latacunga en Cotopaxi en el caso de Los Lobos. La prisión más grande de todas, Litoral, permaneció dividida.

La masacre de febrero de 2021 también marcó el inicio de un periodo de intensa violencia, tanto dentro como fuera de las prisiones. En el sistema penitenciario, la violencia se disparó de 8,1 muertes violentas por cada 10.000 reclusos en 2019 a 83,55 en 2021, según [estadísticas oficiales](#). La violencia se caracterizó por masacres, pues las bandas lanzaron asaltos contra pabellones controlados por sus rivales.

La prisión Litoral se convirtió en el campo de batalla más sangriento, registrando más de la mitad de las muertes por masacre entre 2021 y 2023, según cifras oficiales. La violencia [alcanzó su punto álgido](#) en Litoral a finales de 2021, cuando, en septiembre, murieron al menos 119 presos², y, en noviembre, otros [68 reclusos fueron asesinados en la misma prisión](#).

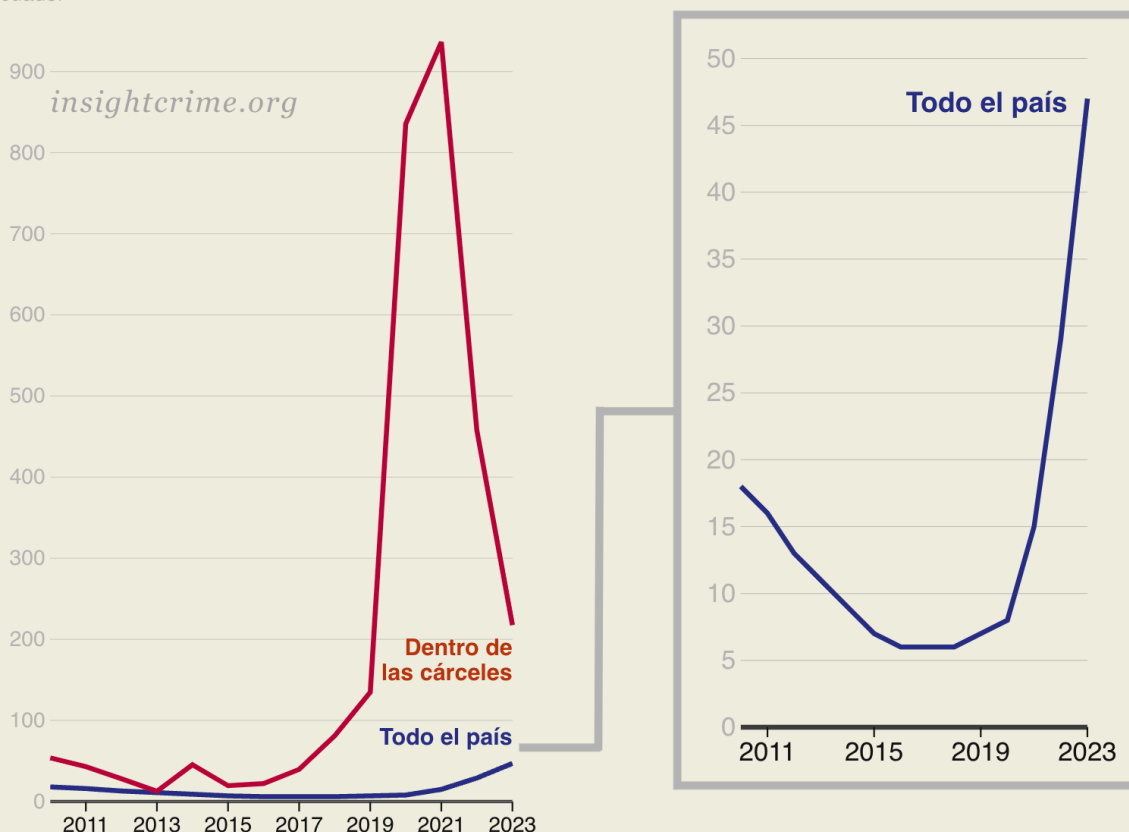
2 El recuento oficial de cadáveres fue de 119, pero las investigaciones periodísticas registraron al menos 126 muertes.



El aumento de las tasas de homicidios en Ecuador entre 2010 y 2023 estuvo estrechamente relacionado con las tasas de muertes violentas en las prisiones del país

Homicidios por cada 100.000 habitantes

Noviembre 2024 | Fuentes: Registros públicos del Servicio de Atención Integral para Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y datos del Ministerio de Gobierno obtenidos por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador



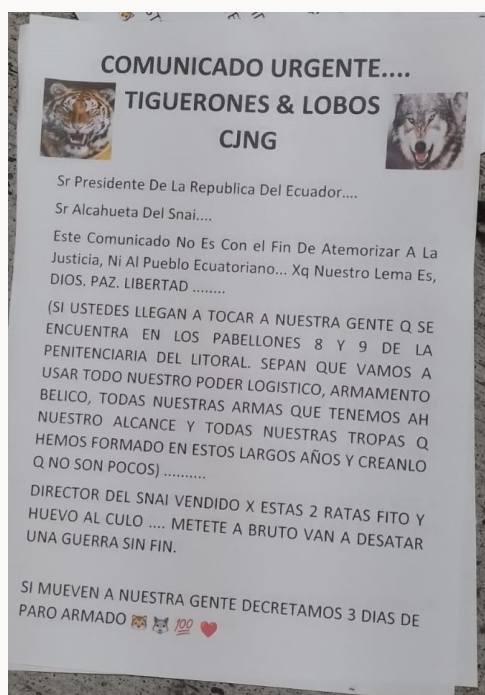
La violencia también se extendió a las calles, ya que los líderes de la mafia utilizaron las alianzas forjadas en las prisiones para expandirse a territorios estratégicos y para hacer la guerra a sus rivales. La tasa nacional de homicidios pasó de 7 a 15 por cada 100.000 habitantes en 2021, según datos del Ministerio del Interior.



Devolver el genio a la botella

La respuesta estatal a la espiral de la crisis fue desde ineficaz hasta activamente perjudicial.

El aspecto más turbio y controvertido de esa respuesta comenzó incluso antes de que se desatara la peor violencia: las bandas intercambiaban información de inteligencia con la Unidad de Inteligencia Penitenciaria (UIP) de la Policía a cambio de privilegios o para perjudicar a sus rivales, según antiguos funcionarios de prisiones, miembros de bandas, investigadores y ecuatorianos expertos en prisiones. En un caso, se descubrió que un agente, que operaba con un nombre falso, había tramitado traslados e introducido teléfonos celulares de contrabando en acciones que, [según los investigadores](#), podrían haber facilitado el asesinato de El Cubano.



Amenaza para que se detengan los traslados de prisiones

Mientras tanto, otras autoridades se esforzaban por controlar el conflicto. Tras las matanzas de febrero de 2021, la práctica ya habitual de asignar a las PPLs a los centros en función de su afiliación a las bandas — real o supuesta— se convirtió en una política no oficial. Si bien esto mantuvo separados a los rivales en guerra, cimentó el control de las bandas sobre sus territorios dentro del sistema, otorgándoles el monopolio tanto de los negocios como de la violencia en estos espacios. Esto, según exfuncionarios de prisiones y de la policía, representó la etapa final en la toma del control del sistema por parte de los criminales.

“Cuando se asigna un pabellón a las bandas, lo único que se hace es darles más poder”, dijo un exfuncionario policial. “En lugar de mantenerlos separados [a los miembros de

las bandas], se les asignaron áreas específicas, y ahí es donde empieza justamente a agudizarse el problema de las matanzas”.

De hecho, la política de dividir los pabellones por la afiliación de banda, combinada con traslados estratégicos y masivos, demostró ser una combinación letal. En abril de 2022, por ejemplo, un ataque de Los Lobos [contra una facción disidente llamada R7](#) en la prisión de Turi resultó en 20 reclusos muertos. Los posteriores



traslados de los líderes de R7 y Los Lobos, y su asignación a pabellones específicos, provocaron nuevas masacres en la [prisión de Bellavista, en Santo Domingo](#), y en la [prisión de El Inca, en Quito](#).

Pero fue el traslado de 1.000 reclusos de Litoral en noviembre de ese mismo año lo que pareció conducir a [la escalada de violencia](#) más siniestra, ya que las bandas en las prisiones se volvieron contra las autoridades gubernamentales. A finales de octubre, cuando se difundió la noticia de los planes, las bandas asesinaron a agentes de policía, detonaron [carros bomba](#) y [colgaron cadáveres en puentes](#). En unas notas que supuestamente eran de Los Lobos y Los Tiguerones se advertía al gobierno de que no trasladara a ningún preso de los pabellones que controlaban, o responderían con “todas las armas a nuestra disposición y todas nuestras tropas”.

Los atentados representaron la primera vez que las bandas de Ecuador perpetraban atentados de estilo terrorista contra el Estado, y los primeros indicios de que las bandas de las prisiones eran capaces de lanzar acciones coordinadas en el exterior.

El gobierno, en un claro aprieto, aplicó la estrategia del palo y la zanahoria. El palo llegó en forma de una nueva ley. En 2022, se aprobó la Ley de uso legítimo de la fuerza. La ley creó el marco para que la policía y el ejército intervinieran en las prisiones para sofocar la violencia. Su objetivo, según una funcionaria que participó en la redacción de la ley, era simplemente evitar más muertes. Y sus parámetros eran claros: cualquier intervención militar debía tener un alcance limitado y ser de carácter temporal.

La opinión pública tuvo una primera visión de cómo sería esto cuando, en julio de 2023, la amenaza de nuevos [traslados masivos](#) provocó huelgas de hambre en 13 prisiones diferentes y la toma de varios guardias como rehenes en Litoral. En respuesta, el gobierno organizó una operación militar para retomar el control de la prisión. Seguirían más operaciones militares. Sin embargo, los barandales originales fueron modificados y, en dos años, la ley facilitaría un movimiento que llevaría a Ecuador en una dirección muy diferente.

La zanahoria fue la [Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación](#). Creada en diciembre de 2021, la comisión estaba formada por nueve representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, académicos y expertos nacionales e internacionales en derechos humanos. Se le encomendó la tarea de analizar las fallas del sistema y proporcionar al gobierno, dirigido en ese momento por el presidente Guillermo Lasso, estrategias alternativas para abordar la



crisis penitenciaria. El [informe de la comisión](#), que se presentó en 2022, fue condenatorio. Citando fallas ya conocidas, sostuvo que las prisiones de Ecuador “no son centros de rehabilitación, sino más bien almacenes de castigos. Por un lado, son centros de castigos y, por otro, son escuelas de tácticas delincuenciales”.

Mientras elaboraban el informe, los miembros de la comisión también habían empezado a hablar con los principales jefes de las mafias para poner fin a las guerras entre bandas y a la violencia en las cárceles. (Ese proceso —y la propia comisión— acabaron envueltos en una polémica debido a las [supuestas estrechas](#) relaciones de algunos miembros con los líderes de las bandas).

Paralelamente a estos diálogos, los propios líderes de las bandas hablaban de paz y, en 2022, las negociaciones entre los principales líderes de las bandas conducirían a otra reorganización criminal, ya que Los Chone Killers y Los Tiguerones se realinearon con Los Choneros. Sin embargo, en lugar de traer la paz, esta reorganización sentó las bases para un nuevo ciclo de violencia dentro y fuera de las cárceles, cuando Los Lobos, que para entonces rivalizaban con Los Choneros en su alcance e influencia nacional, se negaron a unirse.

El proceso también se cobró una víctima de alto perfil cuando, en octubre de 2022, el narcotraficante Leandro [Norero fue asesinado](#) por Los Lobos en una masacre en la prisión de Latacunga que dejó 16 muertos. La muerte de Norero tendría ramificaciones de gran alcance, ya que sacaba del tablero criminal a uno de los principales apoyos financieros de las bandas carcelarias. También llevaría a la revelación de una de las [redes de corrupción](#) más extensas jamás vistas en Ecuador, una red que supuestamente se extendía hasta lo más profundo del sistema penitenciario y hasta el máximo responsable del SNAI, el director Pablo Ramírez.

El camino hacia la ‘Mano Dura’

A principios de 2023, la espiral de violencia, los escándalos de corrupción y la dispersa respuesta oficial a las crisis pusieron a Ecuador al borde del abismo. La situación estaba a punto de empeorar. En mayo, el Presidente Lasso se vio obligado a abandonar su cargo [tras las acusaciones](#) de corrupción en la contratación pública y los vínculos entre altos funcionarios y el crimen organizado albanés. En las elecciones especiales que siguieron, la violencia y la amenaza de violencia persiguieron a los candidatos. Esto culminó en agosto, cuando Fernando Villavicencio, quien se presentaba con una plataforma anticorrupción, [fue abatido a tiros](#) a la salida de un acto de campaña.



El ganador final, el joven Daniel Noboa, hijo de un magnate bananero, había hecho campaña inicialmente sobre la importancia de las intervenciones sociales en la lucha contra el crimen organizado. Pero a medida que crecía el temor de la población tras el asesinato de Villavicencio, cambió de rumbo con una serie de propuestas para dar una respuesta militarista de mano dura a la crisis de seguridad. Y, tras asumir el cargo en octubre,



Integrantes de Los Tiguerones irrumpen en canal de TV en vivo. Crédito: captura de pantalla de la transmisión en vivo

Noboa inició su administración con una nueva ronda de traslados de presos y la promesa de más, incluidos el líder de Los Choneros, Fito, y Fabricio Colón Pico, una figura de alto rango de Los Lobos, a la instalación de máxima seguridad conocida como La Roca. Pero en enero, pocos días antes de que las autoridades trasladaran a los dirigentes, estos se fugaron.

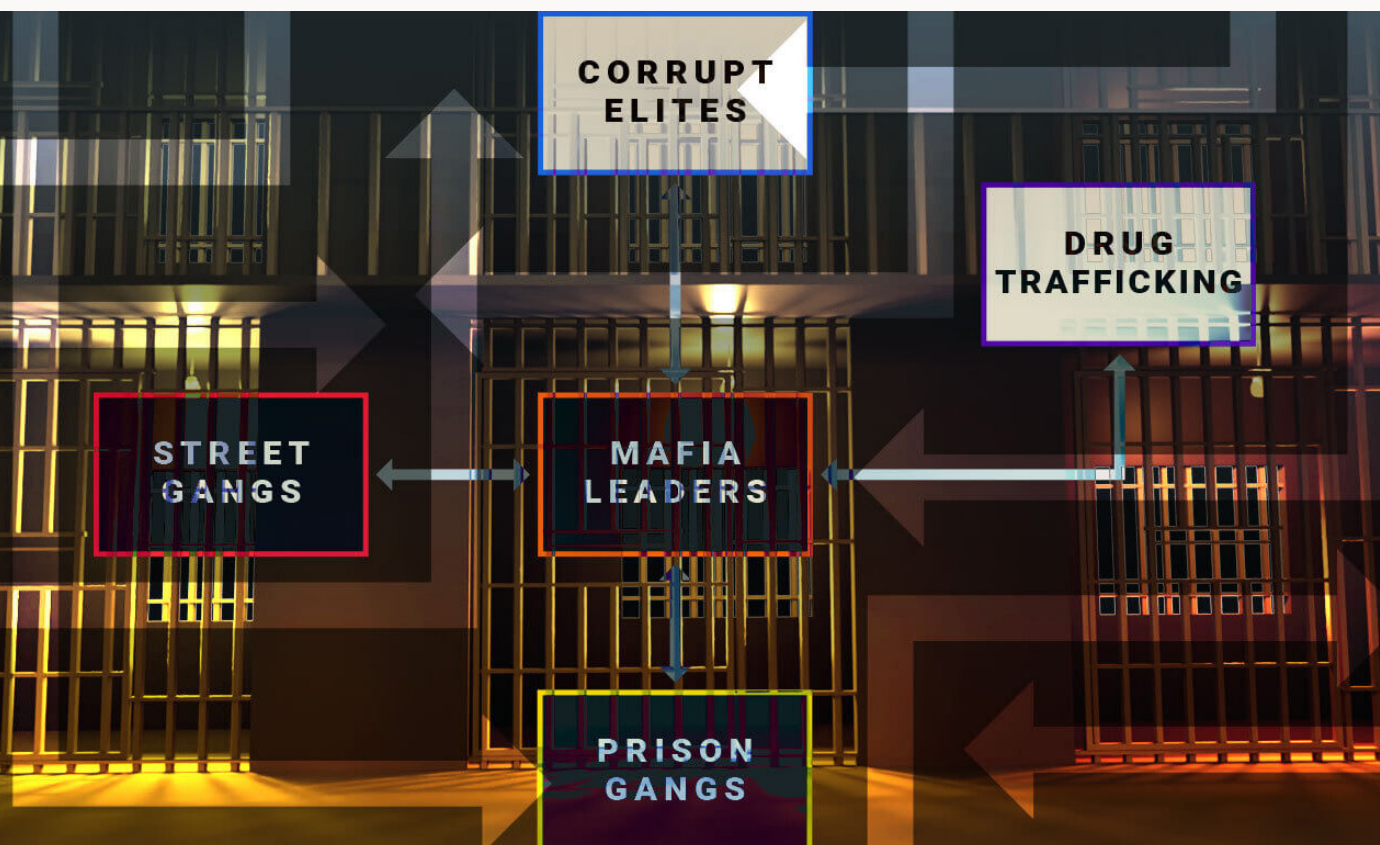
Siguió otra oleada de violencia, cuando criminales lanzaron represalias aparentemente coordinadas contra una amplia gama de objetivos, organizando una toma en directo de un canal de televisión y la toma de varias prisiones. Los ataques parecieron pillar desprevenido al gobierno, que reaccionó catalogando a 22 bandas como organizaciones terroristas y declarando que el Estado estaba en guerra con estos grupos. Sin embargo, la lista fue cuestionada por expertos y analistas. Además de la problemática designación de grupos criminales como terroristas, también incluía a bandas poco conocidas con una influencia cuestionable en la dinámica criminal.

Aun así, el gobierno de Noboa siguió adelante. Operando bajo el marco de la modificada Ley de uso legítimo de la fuerza, los soldados relevaron al SNAI de sus funciones y tomaron agresivamente el control de los pabellones que estaban en manos de las mafias. Al mismo tiempo, los militares tomaron las calles y se unieron a la policía para lanzar una ofensiva de seguridad de mano dura en todo el país. Esto marcó un final abrupto a la era del dominio total de las mafias sobre el sistema penitenciario. Pero había pocos indicios de lo que vendría después.



3

El negocio de las prisiones



En el momento en que una persona ingresa al sistema penitenciario de Ecuador, se convierte en un recurso a explotar por el crimen organizado y los funcionarios corruptos en una economía criminal de dimensiones asombrosas. Ya sea un gángster curtido, un criminal de poca monta o un civil que se enfrenta a sus primeros cargos, esta máquina se los traga.

“La cárcel es un negocio. En cuanto llegas, empiezas a cobrar”, dijo un comandante de Los Choneros. “La cárcel es una de las principales fuentes de ingresos que tiene la organización”.

La forma exacta de cómo que funciona este negocio varía de una prisión a otra, e incluso de un pabellón a otro, dependiendo de factores como el tamaño de la instalación, los niveles de corrupción, qué grupo criminal la controla, las reglas y caprichos de los comandantes criminales individuales, e incluso el papel estratégico de la prisión en el ecosistema criminal. Por lo tanto, lo que sigue —



que se basa en extensas entrevistas con reclusos actuales y antiguos, miembros de bandas, directores de prisiones, exfuncionarios del SNAI, funcionarios gubernamentales que han investigado y formulado políticas sobre prisiones, funcionarios de seguridad con experiencia en las prisiones y expertos de la sociedad civil, así como en informes compilados por investigadores gubernamentales y de la sociedad civil— debe entenderse como una panorámica generalizada del negocio ilícito de las prisiones tal como era antes de la intervención militar de 2024. Aunque esa intervención interrumpió algunas de las dinámicas criminales que describimos a continuación, en el momento en que publicamos este informe, había signos crecientes de que se estaba restableciendo.

El costo de sobrevivir



Hasta la intervención militar en las prisiones de Ecuador, cada nuevo preso comenzaba su estancia en el sistema penitenciario en una celda de detención, donde se encontraban con un representante de la mafia que iniciaba la cadena de explotación. Primero tenían que pagar una cuota solo para entrar en el pabellón y que se les asignara un lugar donde dormir.



El representante les entregaba un celular y les daba un número de cuenta bancaria. Luego les indicaba que llamaran a su familia fuera de la prisión y organizaran una transferencia. Para la mayoría de las PPLs, esas comisiones eran de cientos de dólares, pero podían llegar a los miles de dólares si la mafia consideraba que disponían de más capital. En Litoral, los que no podían o no querían pagar eran golpeados y abandonados en la celda de detención, según un antiguo recluso. Eventualmente, a los presos sin conexiones ni dinero fuera de la cárcel les quedaban tres opciones: convertirse en miembros de una banda o en sirvientes por deuda, o enfrentarse a casi morir de hambre, sobreviviendo a punta de sobras.

“A esa persona la retienen en la celda como castigo, ni siquiera la dejan salir al patio o darle comida, la dejan sufriendo así hasta que pueda resolverlo o se una a la banda, entonces la indultarán, la sacarán de allí y la pondrán a trabajar para ellos”, dijo un ex-presos del pabellón de banda Latin Kings de Litoral.

En algunas prisiones, las PPLs tenían que seguir pagando “protección”. Las bandas solían comunicarse directamente con las familias o los seres queridos para amenazarlos. Un antiguo recluso describió cómo, en ocasiones, enviaban videos de palizas, que incluían amenazas de matarlos si no les pagaban. Los presos con recursos económicos o capital criminal para explotar se enfrentaban a menudo a palizas e incluso a tortura.

“Si se enteran de que alguien llega con dinero, le van a hacer la vida imposible, porque fuera se puede hacer cualquier cosa si se tiene dinero, pero dentro, su palabra no significa nada, es la palabra de las mafias la que cuenta”, afirmó un ex-presos de un pabellón de Las Águilas de Litoral.

Así lo interiorizaran o no, quienes decidían unirse a una banda asumían un compromiso para toda la vida. Incluso después de salir de prisión, el servicio a la banda nunca terminaba. Los sirvientes, por su parte, empezaban limpiando celdas, lavando ropa y sirviendo comida.

Una vez dentro, las PPLs se enfrentan a más gastos, a menudo por bienes y servicios que el sistema penitenciario debería haber proporcionado. La comida, por ejemplo, la proporciona una empresa privada, que ha ganado cientos de millones de dólares con contratos del Estado a pesar de ser condenada sistemáticamente por proporcionar cantidades insuficientes y alimentos de calidad inferior. Dentro de la prisión, se entregaba a los representantes de las bandas a la entrada de cada pabellón. Después de que las bandas cogían lo que querían, se repartían el resto en función de quién había pagado una cuota semanal. Cuanto más pagaba el preso, más comida recibía. A los que no podían pagar se les daba lo justo para evitar la muerte.



“Si quieres al menos comer una comida, como una persona, entonces tienes que pagar por esa comida, si no puedes pagar, comerás como un perro”, dijo el ex-presado del pabellón de Las Águilas.

A menudo, los prisioneros no tenían elección a la hora de aceptar esta comida; simplemente se les distribuía y se les decía el precio. Si no podían pagar, se endeudaban. En muchas prisiones, el suministro de agua, vacilante o a menudo totalmente disfuncional, también hacía que las PPLs dependieran del agua embotellada, que las bandas vendían con grandes sobreprecios. Los productos básicos de higiene personal y limpieza se vendían de la misma manera, y a menudo se incluían en una especie de paquete que formaba parte de las cuotas semanales.

Las raciones podían complementarse con alimentos y otros productos básicos procedentes de los economatos estatales, donde cada preso tenía derecho a comprar cierta cantidad de productos, y de tiendas y negocios gestionados por los presos. Estos negocios vendían contrabando, así como productos obtenidos de los economatos mediante la compra de las cuotas no utilizadas de las PPLs sin fondos. Los sobreprecios podían ser exorbitantes y los beneficios de algo tan básico como vender huevos eran vertiginosos. En algunos casos, las bandas también gestionaban sus propias cocinas, donde mejoraban la comida casi incomedible que se les proporcionaba o elaboraban sus propios platos con alimentos de contrabando. Los negocios preparaban platos que iban desde el pollo asado hasta especialidades ecuatorianas como las bolas de plátano conocidas como bolones, todos vendidos con increíbles sobreprecios.

En ocasiones, las tiendas y los comercios eran propiedad de las mafias y estaban gestionados por ellas. En otros casos, eran gestionados con capital mafioso o con su permiso. Permitir el funcionamiento de estos negocios —y la entrada de los bienes que necesitaban para ello— era también un negocio lucrativo para los guardias y funcionarios hasta el nivel de director de la prisión, así como para la policía que administraba la entrada a la prisión.

Las bandas también se beneficiaron de las comunicaciones y las visitas, el sustento de tantos presos. Al igual que con el servicio de comidas, la oportunidad emanaba de las fallas del sistema penitenciario. En la mayoría de las instalaciones, los sistemas de comunicación eran limitados, por lo que la mayoría de las PPLs pagaban por tener acceso a teléfonos celulares de contrabando. Si tenían dinero suficiente, pagaban por un teléfono de contrabando y luego por un paquete de datos semanal para llamadas e internet. Las visitas en persona podían suponer otro pago. Los que no utilizaban su cuota también vendían e intercambiaban las visitas.



Las bandas también facilitaban el acceso a los vicios típicos de las prisiones: drogas, alcohol, tabaco, juego y sexo, entre otros. A veces, estos vicios confluían en fiestas privadas o incluso festivales para la población general.

Las bandas recaudaban pagos adicionales por trabajos de mantenimiento o por la compra de instalaciones comunes, como un televisor, de acuerdo con un ex director de una prisión. Aparentemente, estos “impuestos” se destinaban al bien común, pero gran parte del total recaudado era desviado por las bandas.

El costo de la prohibición



El negocio de las bandas dependía de guardias y policías corruptos. El contrabando tenía que pasar por filtros de seguridad gestionados por la policía, que a menudo incluían cámaras, detectores de metales y escáneres. Sin embargo, por estos puntos de inspección pasaba de todo, desde máquinas para hacer helados hasta fusiles de asalto. En casos extremos, los funcionarios tuvieron que desconectar las cámaras y los escáneres o provocar apagones, mientras los artículos a granel pasaban de largo.



En otros casos, las PPLs utilizaban el suministro de alimentos para introducir contrabando en la prisión. Los grandes contenedores utilizados para introducir la comida de las PPLs no pasaban por los mismos controles de seguridad, lo que facilitaba el camuflaje de los productos ilícitos. La propia empresa responsable ha caído bajo sospecha. En 2024, [el gobierno acusó](#) a la empresa que tiene casi el monopolio del suministro de alimentos a las prisiones, de ser cómplice del crimen organizado.

El negocio del contrabando también requería protección frente a funcionarios honrados o fuerzas de seguridad externas. De ello se encargaban los guardias, directores y otros funcionarios que avisaban a las bandas de las próximas redadas o inspecciones de seguridad y les ayudaban a ocultar sus armas, drogas y otros artículos de contrabando.

“Cuando ves estas cosas, queda claro que el SNAI, en lugar de ejercer control sobre el interior de las prisiones, era prácticamente una institución alineada con los grupos de crimen organizado”, dijo un exfuncionario de policía que trabajaba en prisiones.

La policía y los guardias también ayudaban a introducir clandestinamente a personas, sobre todo esposas, novias y trabajadoras sexuales, que pasaban la noche e incluso días seguidos. El esquema iba más allá de los puntos de control. La policía y los guardias aceptaban sobornos para falsear el recuento de visitantes que entraban y salían e ignoraban cuándo había visitantes no autorizados entre bastidores durante horas no permitidas para visitas.

Los guardias y funcionarios de prisiones también obviaron su deber de proteger a los presos más vulnerables, incluyendo a aquellos reclusos en el pabellón de atención prioritaria, lo que abrió la puerta a más oportunidades de negocio y abusos. Las mujeres trans eran especialmente vulnerables. En algunos centros penitenciarios, las bandas tenían acceso a los pabellones especiales donde solían alojarse estas reclusas. En otros casos, simplemente se las dejaba en la población general. En ambos casos, las bandas las explotaban, agredían y violaban con regularidad. La misma explotación se producía a veces cuando los centros penitenciarios masculinos estaban conectados con centros penitenciarios femeninos, y los funcionarios de prisiones permitían a las bandas acceder a ellos.



El costo del dinero

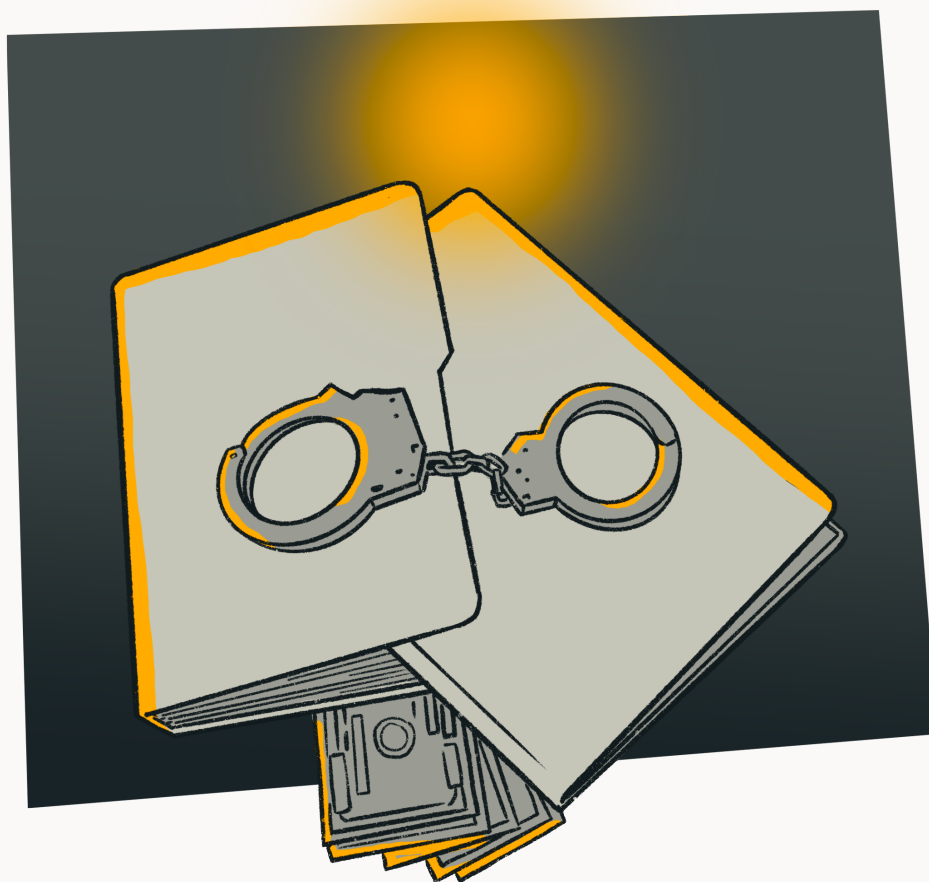


En la mayoría de casos, las PPLs que pagaban bienes, servicios o cualquier extorsión, lo hacían a través de sus contactos fuera de prisión, que realizaban transferencias a cuentas bancarias en constante rotación gestionadas por las mafias. Sin embargo, también existían “bancos” internos, que manejaban efectivo y realizaban operaciones de usura. Si los presos necesitaban dinero en efectivo dentro, podían obtenerlo del banco a cambio de una comisión. Sin embargo, el objetivo principal del banco era prestar dinero a quienes tenían graves necesidades económicas o problemas de drogadicción. Las tasas de interés eran elevadas, y las PPLs se veían atrapadas en una bola de nieve que se hacía más grande con cada pago atrasado.

Las bandas también imponían directamente deudas con tasas igualmente abusivas. A menudo se trataba de deudas por pagos atrasados, pero en otras ocasiones eran simplemente inventadas por los líderes de las bandas para extorsionar a sus víctimas y conseguir más dinero.



El costo de salir



Fuera de las prisiones, las redes de corrupción eran las únicas que se lucraban. Dos de las más importantes se centraban en el movimiento de presos a través del sistema.

Funcionarios corruptos se encargaban de aprobar los traslados entre centros, vendiendo de hecho el servicio, incluso a miembros de bandas que buscaban moverse entre prisiones con fines estratégicos. Un ex director de prisiones también identificó a funcionarios que utilizaban la amenaza de los traslados como chantaje. En estos casos, dijo, los funcionarios exigían pagos a los presos a cambio de no trasladarlos.

Los funcionarios corruptos también acusaron a los presos que pretendían solicitar la libertad anticipada. Según la legislación ecuatoriana, las PPLs que han cumplido el 60% de su condena pueden solicitar la libertad condicional bajo los llamados regímenes semiabierto y abierto si han completado una serie de programas en áreas como trabajo, educación, deportes y cultura, así como evaluaciones psicológicas. Los presos que participaban en los programas tenían que pagar por cada informe de cada área: hasta US\$500 cada vez, según un antiguo funcionario, lo que sumaba miles de dólares en total. También se vendían informes fraudulentos a quienes no habían asistido a ninguno de los programas.



“Son una mafia”, dijo un exfuncionario del SNAI en Quito. “Hay gente que no participó en absolutamente nada, y les dan 10 sobre 10 por todo, mientras que hay gente que ni siquiera tiene la oportunidad de ir a las escuelas y todo lo demás, y les dan cero”.

Una vez preparado su expediente, el preso tenía que sobornar a los funcionarios de la oficina central para que tramitaran su caso. Los casos de los que pagaban estos sobornos se tramitaban en cuestión de días, mientras que los de las PPLs que no podían o no querían pagar permanecían intactos durante meses. Por último, los jueces que daban el visto bueno a los casos también podían exigir un soborno.

Incluso después de su puesta en libertad, los presos siguieron siendo explotados por estas redes de corrupción. Los liberados bajo los regímenes semiabiertos y abiertos deben seguir firmando con un agente de libertad condicional y participar en determinadas actividades. Los que faltaban a sus sesiones, ya fuera por motivos legítimos como compromisos laborales o problemas de salud, o por razones nefastas, podían pagar a los funcionarios para que falsificaran sus firmas. Incluso los presos que sí asistían a veces tenían que pagar, ya que los funcionarios les exigían un pago para anotar su asistencia en el registro.

Calculando el costo

La suma de estas actividades da lugar a una de las economías criminales más importantes de Ecuador. Este dinero ha financiado un salto evolutivo en la fuerza de las mafias, al tiempo que ha incentivado a los funcionarios corruptos a socavar cualquier intento genuino de reforma penitenciaria para proteger sus propios flujos de ingresos. Pero son los sectores más empobrecidos, los que terminan pagando el costo.

Aunque es imposible calcular las dimensiones exactas de este negocio, varios estudios e investigaciones proporcionan algunas perspectivas.

En 2021, fuentes criminales le dijeron a [La Posta](#) que controlar un pabellón en la Penitenciaría del Litoral valía entre US\$50,000 y US\$60,000 semanales para las mafias, lo que equivalía a hasta US\$37 millones anuales en ganancias criminales por controlar solo esta instalación. Si estas ganancias se replicaran en todo el sistema, entonces el control de los pabellones hubiera valido aproximadamente US\$150 millones durante ese año.

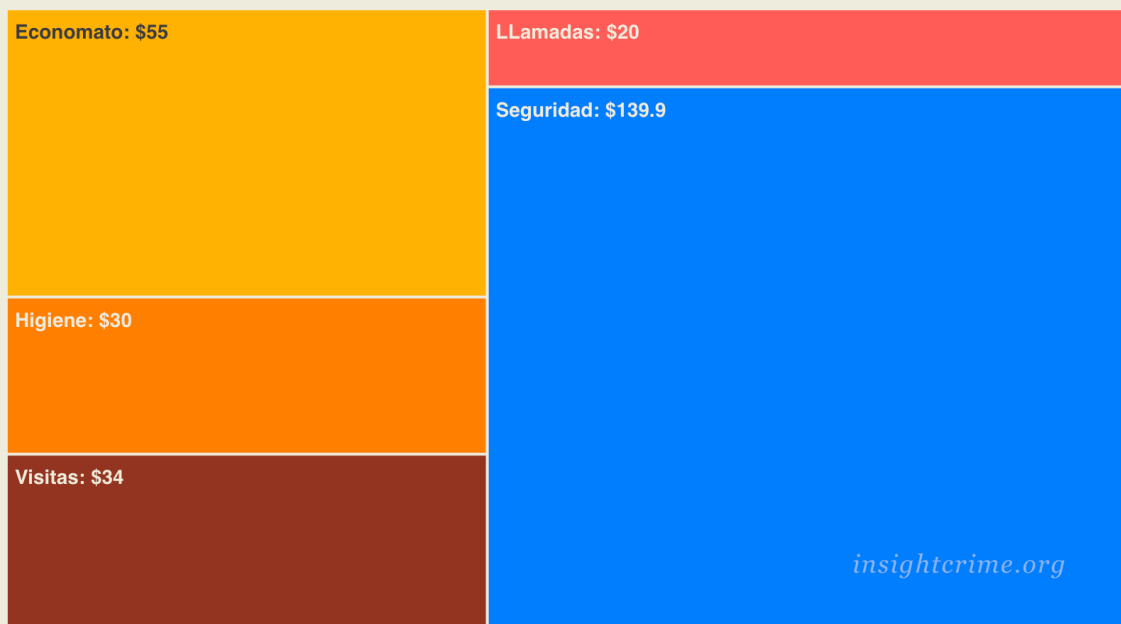


Según un estudio sobre el sistema penitenciario realizado en 2021 [por el centro de investigación etnográfica Kaleidos](#), la familia media de un preso pagaba US\$124 al mes por comida, productos de limpieza e higiene y una visita al mes. Este costo ascendía a los US\$251 mensuales cuando incluía el acceso a una llamada y dinero de “protección”. En el año en que se llevó a cabo el estudio, la población presa superaba las 38.000 personas, lo que representaba entre US\$56 y US\$114 millones de ingresos solo por estos pagos.

Las familias declararon gastar hasta US\$251 al mes para cubrir las necesidades básicas de sus familiares encarcelados

El costo de ser un recluso en Ecuador

Noviembre 2024 | Fuente: Encuesta 2021 del centro de investigación etnográfica Kaleidos



El mercado de bienes de contrabando podría proporcionar fácilmente beneficios similares. Los precios de las drogas, el alcohol y los cigarrillos varían en las distintas prisiones, y no existen datos precisos sobre los consumidores activos, ni datos que distingan entre consumo ocasional o habitual y adicción. No obstante, es posible hacer estimaciones aproximadas utilizando los precios facilitados por antiguos reclusos y los [datos de un pasado estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito](#) sobre el consumo entre la población reclusa.



Según el estudio, el 34% de las PPLs había consumido drogas antes de entrar en prisión, el 69% alcohol y el 47% cigarrillos. Si esos consumidores siguieran consumiendo en prisión, consumiendo una media de una pequeña dosis de droga al día, una botella de licor casero a la semana y tres paquetes de cigarrillos a la semana, entonces, basándonos en la población reclusa del mismo año que el estudio de Kaleidos, el mercado de la droga tendría un valor de US\$32 millones al año, las ventas de alcohol representarían más de US\$54 millones al año y las de tabaco más de US\$19 millones.

Sumados, estos negocios penitenciarios ilícitos, que no representan todos los mercados en juego, tienen un valor de más de US\$200 millones al año. En comparación, el presupuesto del gobierno para el SNAI en 2021 fue de poco más de US\$99 millones, según documentos internos del SNAI obtenidos por InSight Crime.

La carga financiera de estos gastos suele recaer en las familias de las PPLs, especialmente en las mujeres. En una encuesta realizada a familiares para el estudio Kaleidos, el 85% de las principales responsables del mantenimiento de las PPLs eran mujeres, predominantemente esposas y novias, pero también madres.

Además, la mayor parte de la población reclusa procede de las comunidades más pobres y vulnerables de Ecuador. El ingreso mensual medio de los encuestados por Kaleidos era de solo US\$282, muy por debajo de los US\$400, el salario mínimo de la época. Por ello, a la mayoría no le quedaba más remedio que pedir dinero prestado para sufragar los gastos de sus familiares o seres queridos en prisión. Más del 80% de los encuestados declaró haberse endeudado, y la mayoría afirmó estar “siempre” o “casi siempre” endeudada.



4

Las mafias carcelarias: el eje criminal de Ecuador



El crimen organizado en Ecuador opera hoy en varios niveles. En los escalones superiores se encuentran las organizaciones criminales transnacionales, los narcotraficantes ecuatorianos y las élites corruptas. En el escalón inferior se encuentran los grupos criminales callejeros y las bandas juveniles. Los grupos más poderosos del sistema penitenciario, conocidos en Ecuador como “mafias”, se sitúan en la intersección entre estos niveles, conectándose y coordinándose entre ellos.

Los cambios revolucionarios en el crimen organizado que crearon este papel para las mafias se remontan en gran medida a un visionario del crimen: Rasquiña, que unió los niveles inferiores del crimen organizado bajo el paraguas de Los



Choneros, y luego los contrató como mano de obra criminal para las élites del mundo criminal. Lo hizo desde dentro del sistema penitenciario, que utilizó como fuente de reclutamiento, oportunidad para establecer redes criminales y base de operaciones segura, protegida tanto de sus rivales como de las fuerzas del orden.



REDES MAFIOSAS CARCELARIAS

Aunque el liderazgo de Rasquiña era incuestionable, muchos de los grupos integrados en la federación de Los Choneros mantuvieron sus propias operaciones dentro y fuera de las prisiones, conservaron sus propias estructuras de liderazgo y jerarquías y, en algunos casos, incluso sus propias identidades criminales. Cuando Rasquiña fue asesinado en 2020, esa federación se dividió en facciones enfrentadas, que surgieron como mafias por derecho propio. El resultado de



este conflicto ha sido un submundo mucho más fragmentado y fluido, con identidades, alianzas y territorios en constante cambio. Pero el modelo criminal desarrollado por Rasquiña ha perdurado en gran medida, y las mafias carcelarias que produjo siguen estando en el centro del ecosistema criminal ecuatoriano, aunque ningún grupo tenga el monopolio.

El paisaje mafioso

El mundo criminal de Ecuador atraviesa actualmente un período de atomización, en el que las grandes mafias se fragmentan y los grupos más pequeños afirman cada vez más su autonomía. Sin embargo, por el momento hay dos organizaciones que dominan el nivel mafioso del crimen organizado ecuatoriano: Los Choneros, reformados bajo el liderazgo de Fito, y sus acérrimos enemigos, Los Lobos. Por debajo de estas hay un mosaico de mafias más pequeñas y bandas locales. La mayoría están integradas o aliadas con las redes más grandes, imitando la estructura original de la federación de Los Choneros, pero sin los mismos niveles de unidad o control central. Algunas, sin embargo, operan de forma totalmente independiente.

Los Choneros conservan algunos elementos de su estructura anterior, ya que facciones como Las Águilas y Los Fatales operan de forma autónoma, pero también son componentes centrales de la red más amplia. Pero en su mayor parte, Los Choneros actúan ahora más como líderes de una alianza que como jefes de una federación consolidada, con mafias más pequeñas que actúan como socios menores en lugar de como facciones subordinadas. Los más destacados de estos grupos son Los Tiguerones, La Mafia 18 y Los Chone Killers, según fuentes criminales y de las fuerzas de seguridad.

Según información proporcionada por el Ministerio de Defensa y exfuncionarios de inteligencia, a principios de 2024 Los Choneros o sus subfacciones, Las Águilas y Los Fatales, estaban presentes en 10 de las 24 provincias de Ecuador. Sus principales territorios en el sistema penitenciario son la cárcel de La Regional en Guayaquil, que ha funcionado como su cuartel general criminal en los últimos años, y la cárcel de Rodeo en su provincia natal de Manabí, junto con varios pabellones de la cárcel del Litoral en Guayaquil y varias cárceles más pequeñas.

A nivel nacional, Los Choneros tienen un rival principal, Los Lobos. Tras el asesinato de Rasquiña, Los Lobos tomaron la iniciativa de formar la alianza disidente que luchó contra Los Choneros. Se autodenominaron Nueva



Generación. Sin embargo, cuando la mayoría de los grupos implicados en esta coalición se aliaron con Los Choneros, Los Lobos rechazaron las perspectivas de una nueva alianza y actuaron en solitario.

Desde entonces, Los Lobos se han expandido agresivamente y, según las mismas fuentes, en 2024 habían establecido presencia en 16 provincias. Dentro del sistema penitenciario, su base de mando antes de la intervención militar estaba en la prisión de Latacunga, en Cotopaxi, mientras que también tenían el control total de la prisión de Turi, en su territorio natal de Cuenca, así como al menos un pabellón en el Litoral y varias prisiones más pequeñas.

Desde que la alianza Nueva Generación se desmoronó, Los Lobos se han centrado menos en las alianzas y más en construir su propia federación, aunque siguen trabajando con otras bandas más pequeñas en sus esfuerzos por establecer un baluarte contra la alianza de Los Choneros, según fuentes policiales de las regiones en disputa. En 2024, hubo indicios de que este enfoque se estaba resquebrajando, con [informes de facciones renegadas](#) que se dividieron e incluso disputaron territorio a la federación.

Por debajo de estos dos grupos paraguas se encuentran mafias mucho más pequeñas y localizadas, pero que mantienen sus propias funciones y conexiones independientes en las economías criminales de alto nivel y no dependen de aliados más poderosos para acceder al tráfico transnacional de drogas. Entre los principales grupos que operan a este nivel se encuentran Los Tiguerones y Los Lagartos. Estos grupos operan predominantemente en sus regiones de origen, aunque en el caso de Los Tiguerones, esto incluye tanto Esmeraldas como a la diáspora de Esmeraldas en Guayaquil.

Dentro del sistema penitenciario, el alcance de estas mafias es más limitado pero aún significativo. Los Tiguerones son el actor dominante en la cárcel de Esmeraldas, aunque una fuente criminal informó que no tienen el control total debido a la presencia del grupo rival, Los Gángsters. También comandan al menos un pabellón en Litoral. Los Lagartos, por su parte, tienen influencia en el centro de detención provisional del complejo penitenciario de Guayaquil.

Por debajo de estos grupos se encuentran mafias y bandas más pequeñas y localizadas, como Los Chone Killers, Mafia 18 y R7, que conservan sus propias identidades y territorios, pero suelen depender de redes mafiosas más grandes para acceder a las altas esferas del mundo criminal. Estos grupos suelen operar en un mismo lugar y a menudo a lo largo de un eslabón de la cadena de suministro de drogas. Los Chone Killers, por ejemplo, operan en la ciudad de [Durán](#), que se utiliza para almacenar drogas que se preparan para su envío desde Guayaquil. La influencia de estos grupos dentro de las prisiones es sustancialmente más



limitada, aunque Los Chone Killers han controlado anteriormente un pabellón de Litoral, y R7 se disputó el control de la prisión más pequeña de Bellavista con Los Lobos.

Más allá de este nivel, los grupos no tienen las conexiones criminales, la capacidad y el alcance para ser considerados completamente mafias, pues operan más como bandas callejeras dedicadas en gran medida a economías criminales de bajo nivel. Sin embargo, estas bandas, como Los Gánsters en Esmeraldas, o Los Duendes, Freddy Krueger y el Cuartel de las Feas en Guayaquil, están frecuentemente integradas o aliadas con redes mafiosas, que pueden utilizarlas para controlar territorios o contratarlas para trabajos específicos al servicio de operaciones criminales de mayor nivel.

La excepción a este modelo son **Los Latin Kings**, que desafían estas categorías básicas. Los Latin Kings eran originalmente una de las bandas juveniles conocidas como naciones, y tienen una larga y rica historia en toda la región. Sin embargo, en Ecuador, tanto fuentes criminales como oficiales afirman que Los Latin Kings han evolucionado hasta convertirse en una mafia por derecho propio, controlando los pabellones de las prisiones, desempeñando un papel en el tráfico de drogas, estableciendo vínculos con élites corruptas y gestionando una serie de economías criminales en territorios ajenos a las prisiones. Sin embargo, fuentes de la organización sostienen que, si bien esto se aplica a ciertas facciones de Los Latin Kings, otras conservan más sus características originales, centradas más en la identidad y las raíces comunitarias que en el crimen organizado.

Estructura de las redes mafiosas

Las redes de las mafias penitenciarias suelen estar compuestas por varias alas distintas, coordinadas por la cúpula central y sus principales lugartenientes. Durante gran parte de los últimos cinco años, esta cúpula se ha concentrado en las prisiones. Antes de la intervención militar de 2024 en las prisiones, los líderes del sistema penitenciario podían comunicarse libremente por teléfono y en persona con sus subordinados y socios fuera de las prisiones y dirigir sus operaciones y economías criminales sin intervención del Estado ni ataques de sus enemigos. A partir de ahí, podrían comunicarse en todo el sistema penitenciario.

“Cuando el líder de una banda da una orden, es para todas las cárceles”, afirmó un antiguo funcionario del SNAI. “La mayoría de los líderes están adentro y cuando salen acaban de nuevo adentro, porque su verdadero batallón, su escuadra, están en el interior de los centros de rehabilitación social”.



Aunque la liberación o fuga de varias figuras clave, seguida de la intervención militar, ha diluido esta función de comunicación, muchos otros siguen tras las rejas y hay indicios de que están recuperando su capacidad de coordinación con sus redes fuera de las prisiones. Hay variaciones entre los grupos, pero las redes mafiosas más grandes tienen estructuras similares.

Mientras que en algunos grupos el poder se concentra en manos de un solo líder, como Fito en Los Choneros, o William Joffre Alcívar Bautista, alias “El Negro Willy” de Los Tiguerones, en otros hay más bien una cohorte de líderes máximos, como Los Lobos, que son liderados por Wilmer Geovanny Chavarría Barreiro, alias “Pipo” en conjunto con figuras de alto rango como Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, Montaña Valencia, alias “Palanqueta”, y Fabricio Colón Pico Suárez, alias “Capitán Pico”.

BANDAS CARCELARIAS

Noviembre 2024 | Fuente: Trabajo de campo de InSight Crime

insightcrime.org



Por debajo de los máximos dirigentes se encuentran los altos mandos que coordinan la parte operativa de la red. Muchos de estos mandos desempeñan una doble función. Dentro de las prisiones, son los comandantes de pabellón o caporales, que dirigen los pabellones o, a veces, toda la prisión. Fuera de las prisiones, son los jefes de zona, quienes coordinan las operaciones regionales.



“El 80% de los jefes de zona y el 80% de los puntos de droga, de la distribución, del crimen organizado [están en prisión], la mayoría de las órdenes vienen de adentro”, dijo un comandante de Los Choneros. “Están en su pabellón y tienen un muchacho de confianza que maneja el barrio”.

Llegar a este nivel no solo es un signo de rango y estatus, sino que marca un importante avance económico, ya que les otorga el control de los enormes beneficios criminales que ofrece la gestión de un pabellón de la prisión. Además, dentro de la prisión, el comandante mantiene una red de miembros de base. Según el comandante de Los Choneros, la gente de la mafia se distribuye por toda la prisión o el pabellón de la prisión para garantizar un control total, con alguien a cargo de cada bloque de celdas, y a veces de cada celda.

En los niveles más bajos están los llamados “miembros comunes” del grupo, que realizan las tareas básicas. Las redes mafiosas también incluyen especialistas. Entre ellos se encuentran “las líneas”, que gestionan las redes de distribución de drogas o las actividades de contrabando; los “llaveros”, que controlan el acceso a los bloques de celdas; los “caleteros”, o encargados de almacén, que **manejan** los escondites de armas, drogas y otro contrabando; y los asesinos. Estos últimos, conocidos como “come-muertos”, según el exfuncionario del SNAI, son generalmente reclusos con condenas largas o que esperan no salir nunca del sistema, por lo que los años añadidos a su condena como castigo les importan poco.

Fuera de las prisiones, las operaciones de las mafias pueden dividirse a grandes rasgos entre bandas y nodos especializados dedicados a las operaciones logísticas de las grandes economías criminales, sobre todo el narcotráfico y el tráfico de armas. Aunque formen parte de la misma red y a veces incluso trabajen en la misma tarea, apenas hay contacto directo entre estas alas y, en la mayoría de los casos, ninguna de las partes conoce siquiera la identidad de la otra. La capacidad de coordinación entre ellas recae casi exclusivamente en los altos mandos de las mafias.

“Yo soy una de las personas de confianza de Fito, pero en el ámbito criminal hay otras personas de confianza que son las que le mueven a nivel nacional la droga, o que tienen los armamentos, pero yo no las conozco”, explicó el comandante de Los Choneros.

Por debajo de los jefes de zona están los “jefes de barrio”. Los jefes de barrio son responsables de ejecutar las órdenes de los jefes de nivel superior y de dirigir las operaciones criminales en su territorio. En la mayoría de los casos, tienen cierto grado de autonomía en la gestión de las economías locales y en la forma de interactuar con la población civil.

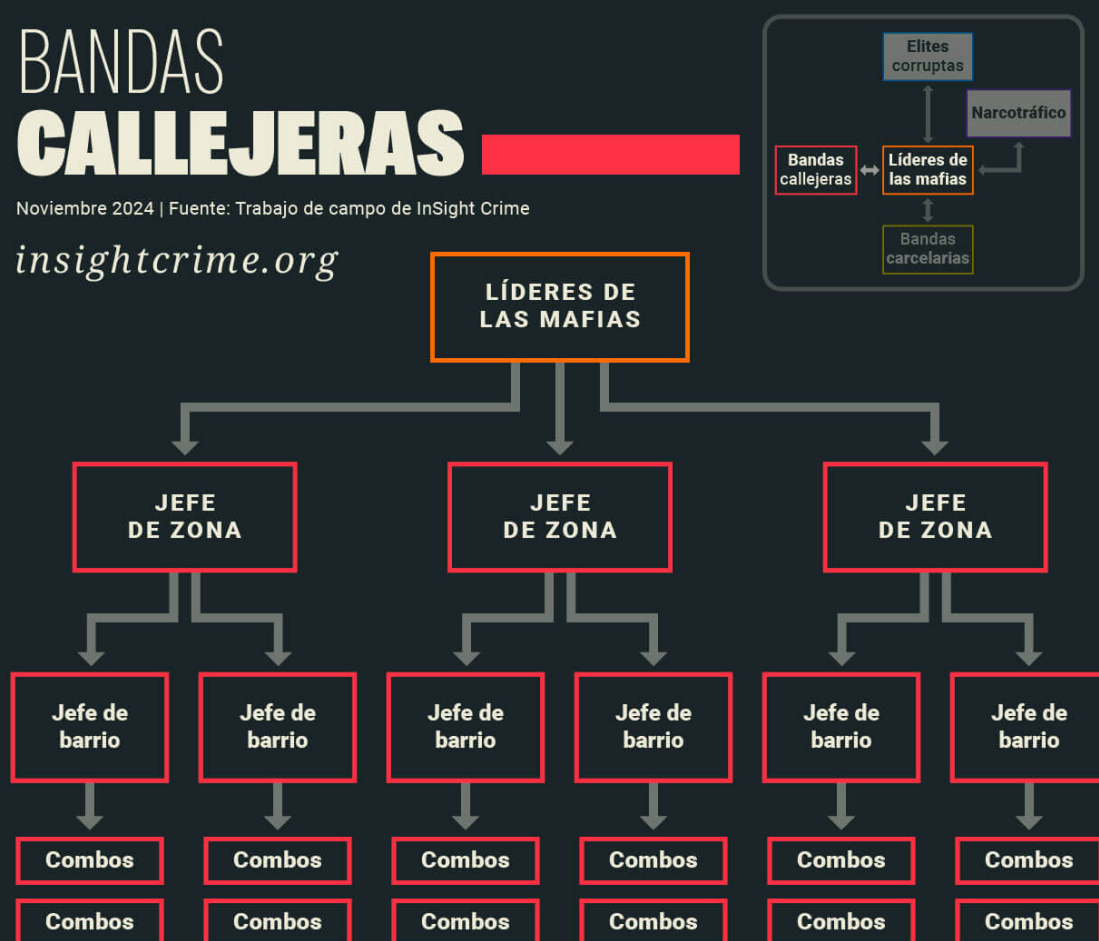


Cada uno de los jefes de barrio dirige una red de bandas callejeras conocidas como “combos”, que actúan como mano de obra de la mafia. El tamaño de los combos varía en función de la mafia y de la dinámica local, pero suele estar formado por pequeños grupos de jóvenes. Aunque su presencia es clave para mantener el territorio, fuentes de Los Choneros y Los Lobos describieron cómo sus actividades suelen limitarse al nivel más bajo de operaciones, principalmente el traslado o la custodia de drogas, dinero o armas, la gestión de economías criminales callejeras y la realización de actos de violencia, incluidos asesinatos.

BANDAS CALLEJERAS

Noviembre 2024 | Fuente: Trabajo de campo de InSight Crime

insightcrime.org



Lo que reciben a cambio varía de un grupo a otro. A menudo, no reciben ningún salario y solo se les paga una parte de cada trabajo o “misión” completada, según el comandante de Los Choneros. Sin embargo, un líder de Los Lobos en Quito dijo que garantizar que los miembros del combo sean atendidos forma parte de las responsabilidades de un jefe de barrio, incluso cuando el dinero no llega.



“Todos comemos. Esa es la palabra. Nadie va a morir de hambre. En otras palabras, si hay dinero, lo repartimos”, dijo el líder de Los Lobos.

Economías criminales

Como se detalla en el apartado anterior de este informe, las propias prisiones representan una de las fuentes de ingresos más importantes para las mafias. Fuera del sistema, también participan en diversas economías criminales, desde el tráfico transnacional de drogas hasta los robos callejeros.

El negocio más importante para los altos mandos, además de las propias prisiones, es el tráfico de drogas, tanto transnacional como nacional. Aunque las mafias ecuatorianas son la cara más visible del narcotráfico internacional en el país, su papel es principalmente el de proporcionar operaciones logísticas y de seguridad a los traficantes transnacionales.

NARCOTRÁFICO

Noviembre 2024 | Fuente: Trabajo de campo de InSight Crime





“Las organizaciones criminales de acá se encargan de la tercerización, de trasladar, almacenar, y enviar la droga. Ese proceso requiere el dominio de un área geográfica, y necesita la neutralización de los objetos que pueden convertirse en un obstáculo, como los controles del Estado”, explicó un fiscal especializado en crimen organizado.

Entre los inversores en estas operaciones de tráfico figuran compradores internacionales, principalmente las organizaciones mexicanas de narcotraficantes Cartel de Sinaloa y Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y redes europeas de crimen organizado, sobre todo traficantes albaneses. Pero también pueden incluirse traficantes ecuatorianos individuales, que actúan como intermediarios y gestores de las rutas a través del país.

Algunos líderes mafiosos, como Rasquiña, han intentado ascender en la jerarquía del narcotráfico, con un éxito limitado, como se señaló en la sección anterior y en el estudio de caso adjunto. Fuentes del mundo criminal ecuatoriano y de inteligencia aseguran que algunas figuras mafiosas de alto rango han establecido relaciones personales con compradores internacionales y con proveedores colombianos, eliminando a los traficantes ecuatorianos que actuaban como intermediarios, pero que sus operaciones siguen siendo menos sofisticadas que las de los traficantes que controlan rutas enteras. Además, según el comandante de Los Choneros, las mafias suelen cobrar por sus servicios en kilos de cocaína que se añaden a la carga que se va a traficar, lo que les da un punto de apoyo en el comercio transnacional.

El complejo trabajo logístico del narcotráfico lo llevan a cabo células especializadas coordinadas por los niveles superiores de la cúpula mafiosa, según fuentes criminales y de las fuerzas de seguridad. Las funciones de los especialistas en tráfico dependen de la ruta en la que trabajan. En las rutas costeras, por ejemplo, en las que pequeñas embarcaciones llevan los cargamentos hasta las costas centroamericanas y mexicanas, los coordinadores se encargan de reclutar pescadores para pilotear las embarcaciones, conseguir la gasolina que necesitan para reabastecerse a lo largo del trayecto y organizar los barcos pesqueros que transportan el combustible hasta los puntos de reabastecimiento predeterminados.

El tráfico a través de los puertos, sobre todo en Guayaquil, requiere una capacidad logística mucho más amplia. Estos cargamentos pueden enviarse a través de empresas exportadoras, mediante el método *rip on/rip off*, en el que se abren contenedores con mercancías lícitas, se les añade droga y luego se colocan precintos aduaneros clonados para ocultar la contaminación; acercándose a los barcos después de que hayan salido del puerto y subiendo los paquetes con



cabrestantes a miembros de la tripulación cooptados; o soldando los paquetes al fondo de los barcos. Cada uno de estos métodos requiere especialistas diferentes, con experiencia en ámbitos como la creación y gestión de empresas fachada, la contratación de trabajadores portuarios o tripulaciones de embarcaciones, y la obtención de información naviera y aduanera sobre el movimiento de buques y contenedores. En todos los casos, estos nodos de especialistas también mantendrán contactos con las fuerzas de seguridad corruptas para obtener información de inteligencia sobre las operaciones y movimientos y los controles de seguridad.

Fuentes de las fuerzas de seguridad y de las mafias dicen que las funciones de las bandas, por su parte, se limitan a recibir, almacenar y transportar cargamentos de droga y a retener, tomar y vigilar territorios estratégicos para el tráfico, como comunidades ribereñas o costeras o zonas próximas a puertos de embarque.

Existe una división de funciones similar en el tráfico y la distribución de drogas a nivel nacional. Los líderes regionales actúan como mayoristas, asegurando y transportando los suministros de droga, para luego distribuirlos entre los jefes de barrio, informan fuentes criminales.

“Nos llega directamente”, dice el jefe de barrio de Lobos. “Nosotros somos los encargados de distribuir la plata y la droga. Si el man nos manda tanta cantidad, eso tenemos que distribuirlo”.

Las bandas locales, por su parte, rompen los paquetes y los distribuyen entre los traficantes callejeros. Aunque los traficantes pueden ser miembros de la banda, en otros casos no lo son de pleno derecho. Según el jefe de barrio de Los Lobos, estos traficantes son responsables del paquete que reciben y deben devolver su valor a los miembros principales de la banda o enfrentarse a graves repercusiones.

Mientras que las drogas ilegales y las prisiones siguen siendo las economías criminales más importantes para los niveles superiores de las mafias, Los Lobos, en particular, son pioneros en los avances de un negocio que podría rivalizar en beneficios: [la minería de oro](#). En los últimos cinco años se ha producido una explosión de la minería ilegal en todo el país, que está siendo explotada por Los Lobos, con indicios de que otros grupos están intentando entrar también.

El *modus operandi* establecido por el grupo consiste en ofrecer protección armada tanto a las explotaciones mineras ilegales como a las legales. Pronto se pasa a la extorsión agresiva, respaldada por la violencia y la exigencia de una parte de la producción. Por último, Los Lobos han intentado apoderarse por completo de las explotaciones legales e ilegales, expulsando a los propietarios de las concesiones.



Los líderes de las mafias también gestionan amplias redes de lavado de dinero. Tanto los medios de comunicación como las investigaciones judiciales han revelado cómo las mafias han acumulado carteras de negocios utilizados para lavar dinero. En Durán, por ejemplo, expertos en seguridad, líderes de la comunidad empresarial y funcionarios y exfuncionarios del gobierno describieron cómo los líderes de las bandas poseen lavanderías, peluquerías, y criaderos de camarones. Las mafias también han creado empresas de construcción, ferretería y otros servicios que se aprovechan de los contratos de [obras públicas](#). Estas empresas proporcionan ingresos, oportunidades para blanquear beneficios criminales y contactos con políticos corruptos.

Por debajo del nivel de liderazgo nacional y regional, se espera que las bandas financien sus operaciones y obtengan ingresos adicionales gestionando economías criminales locales. Los combos pueden participar en una serie de actividades criminales de bajo nivel, como robos, piratería, robo de vehículos, usura, tráfico de tierras, secuestros regulares y exprés, en estos últimos las víctimas son retenidas durante breves periodos mientras los secuestradores extraen dinero de sus cuentas bancarias. En algunos casos, ellos mismos llevan a cabo estas actividades, en otros, regulan o controlan el acceso a las mismas, dijeron a InSight Crime fuentes del hampa, cobrando cuotas de protección en sus áreas de operación.

Además del microtráfico, la piedra angular de las operaciones a nivel de bandas suele ser la extorsión, que se ha [convertido rápidamente en una de las economías criminales más importantes de Ecuador](#). Según la información proporcionada por la policía, la extorsión ha crecido casi un 400% entre 2021 y noviembre de 2023. Es probable que estas cifras representen solo una fracción del número real de casos, ya que la extorsión suele ser muy poco denunciada.

El alcance de la extorsión depende tanto de las mafias implicadas como de cada jefe de barrio. La mayoría de los grupos tienen como objetivo las grandes y medianas empresas, pero en algunas zonas se espera que paguen las empresas de bajo nivel e incluso los particulares. La dinámica de la extorsión también puede variar según las características y economías locales. En las zonas costeras, por ejemplo, las empresas pesqueras se encuentran entre los principales objetivos de extorsión, y las bandas llevan a cabo simultáneamente operaciones de piratería en las que atacan y roban a los barcos que no han pagado su cuota, según medios locales.



Expansión y uso de la violencia

Desde la época de Rasquiña, las mafias ecuatorianas han tratado de expandirse tanto dentro de las prisiones como fuera de ellas mediante una doble estrategia de conflicto y cooptación.

Dentro de las prisiones, la fase inicial de creación de alianzas e integración de bandas más pequeñas en la federación mayor que caracterizó el liderazgo de Rasquiña dio paso a un conflicto brutal. Los asesinatos se han llevado a cabo con una mezcla de armas de fuego y armas blancas, y se han caracterizado por una violencia extrema, con decapitaciones, desmembramientos y mutilaciones de cuerpos como rasgo común.

Aunque los líderes rivales y los miembros conocidos de las bandas son los objetivos principales, la violencia puede ser indiscriminada, o incluso dirigirse deliberadamente contra las prisiones más vulnerables, y, por tanto, más desechables, según un ex miembro de la Comisión de la Asamblea Nacional que investigó el sistema penitenciario.

“Estos llamados ‘polillas’, que eran personas que no generan ingresos, eran las primeras víctimas porque podían enviar este mensaje de ‘aquí mandamos nosotros, y si el gobierno no me hace caso, yo aquí asesino a 20 personas’. Hubo matanzas que dejaron más de 100 víctimas, pero en su mayoría no eran rivales, eran polillas, que no tenían nada”, agregó el ex miembro de la Comisión de la Asamblea Nacional.

El conflicto en las prisiones se ha desarrollado a través de varias formas de violencia carcelaria. La primera es el asalto total al territorio enemigo. Este tipo de ataque ha sido más evidente en la prisión del Litoral, donde diferentes pabellones están controlados por distintas mafias. Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa,³ entre 2021 y 2023, se produjeron siete masacres en Litoral, que en conjunto sumaban más de la mitad de todos los muertos en masacres carcelarias en todo el país durante este período.

En otras prisiones, las masacres pueden entenderse menos como intentos de apoderarse del territorio y más como purgas de rivales. Tal fue el caso cuando la banda R7 se separó de Los Lobos, lo que desencadenó una serie de masacres, ya que las mafias perseguían a facciones disidentes dentro de las prisiones que controlaban o a rivales trasladados a sus instalaciones. En otras ocasiones, las masacres se han utilizado como tapadera para atacar a individuos. Esto fue

³ Las investigaciones periodísticas sugieren que algunas de estas cifras pueden ser una subestimación



evidente en la matanza de 2022 en Latacunga, que supuestamente tenía un único objetivo —el narcotraficante Leandro Norero— pero que cobró 16 vidas.

La violencia en las prisiones, sin embargo, no es solo el resultado de la competencia criminal. Las mafias también han organizado motines coordinados en centros de todo el país en los que han tomado como rehenes a guardias, policías y visitantes para presionar al gobierno a intervenir para proteger a las redes mafiosas atacadas, para disuadir las medidas que **debilitarían la posición de las mafias** y, más recientemente, como demostración de fuerza destinada a impedir una intervención en las prisiones.

En algunas ocasiones, estas acciones dentro de las prisiones se han coordinado con acciones violentas fuera de ellas, que han incluido carros bomba, atentados contra funcionarios de policía y el ya famoso secuestro en directo de un canal de televisión. Según el fiscal, este tipo de violencia es un claro mensaje dirigido directamente al Estado.

“Es una forma de medir el poder”, afirmó.

Aunque la espectacularidad de las masacres en las cárceles puede entenderse como violencia “de mensaje”, en la que la escandalosa brutalidad se utiliza para intimidar a los rivales y a las autoridades, la violencia dentro de las prisiones no se produce exclusivamente a gran escala ni se comete con un estilo tan demostrativo. También son frecuentes los asesinatos selectivos, y las mafias son famosas por escenificar suicidios para evitar llamar la atención sobre los asesinatos.

A pesar del auge de este tipo de violencia en los últimos años, la cooptación de otros y la traición entre organizaciones siguen siendo los principales métodos de expansión territorial.

“Son muy pocas las guerras para tomarse un pabellón. Se trata más bien de cuando te volteas, la palabra que usamos porque traicionas”, dijo el comandante de Los Choneros.

Una dinámica similar puede encontrarse en el exterior, donde las tasas de asesinatos han aumentado al mismo tiempo que las de las cárceles a medida que estallaban los conflictos mafiosos en todo el país. Sin embargo, al igual que dentro de las prisiones, las mafias suelen tratar de introducirse en nuevos territorios acercándose a las bandas callejeras, según fuentes del hampa y de las fuerzas de seguridad.

“Te ofrecen de todo. Te ofrecen dinero, drogas, armas. Ellos te financian todo, te enamoran. Te dicen que vas a ser el encargado de ese sector, pero tú solo trabajas con ellos”, dijo un líder de los Ñetas.



Sin embargo, esas ofertas pueden convertirse rápidamente en amenazas para los líderes de las bandas que las rechazan, según la misma fuente, que fue desplazada tras rechazar una oferta para convertirse en una facción de Los Lagartos.

El mismo método se utiliza para avanzar en territorios enemigos, ya que las mafias tratan de convencer a los jefes de barrio de las redes rivales para que cambien de bando.

“Voltearse es comenzar a comprar a la gente para que cambien de bando. No es que una organización criminal te entre de frente y vamos a una guerra, es que la gente siempre termina traicionando a la organización”, dijo el comandante de Los Choneros.

Cuando una mafia consigue convencerlos para que cambien de bando, utilizan la información que pueden proporcionar las nuevas células para atacar selectivamente a miembros clave de las redes de sus rivales, añadió el comandante.

Sin embargo, mientras que los asesinatos selectivos son la principal forma que tienen las mafias de atacar a sus rivales, los civiles a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado o son objeto de ataques debido a sus relaciones personales o incluso a sus lazos comunitarios. Además, los asesinatos masivos y aparentemente indiscriminados han aumentado en frecuencia en los últimos años, incluidos casos de violencia espectacular, como el [asalto](#) perpetrado en 2023 por 30 tiradores en un puerto pesquero de Esmeraldas, que dejó nueve muertos. Las víctimas, según las autoridades, no eran miembros de una banda, sino pescadores que estaban pagando a una banda rival.

El reclutamiento

Las mafias disponen de dos fuentes de reclutamiento para engrosar sus filas y reforzar sus redes: las prisiones y las calles.

En las prisiones, se ofrece a las PPLs la oportunidad de unirse a la banda, tanto cuando ingresan por primera vez como a lo largo de su estancia en prisión, según antiguos presos. Pero los nuevos reclutas deben demostrar su valía antes de alcanzar la condición de miembros de pleno derecho.

“Cuando la gente entra en la banda es como estar en el cuartel: les hacen hacer ejercicios para subir de rango, empezando como una persona normal y luego subiendo de categoría hasta pertenecer a la banda”, explica un ex-presos de un pabellón de los Latin Kings de Litoral.



Algunos presos describieron cómo los reclutas ascienden por varios niveles de antigüedad, ya sea asumiendo responsabilidades cada vez mayores en ámbitos como la extorsión o la distribución de drogas o mediante actos aislados, como llevar a cabo un asesinato o participar en una masacre. Otros describieron un período de iniciación prolongado, en el que los reclutas deben realizar tareas de base o soportar tratos habitualmente reservados como castigos.

Una vez que un recluta ha demostrado su valía, se le tatúa con la insignia de la banda, lo que se conoce como ser “plaqueado”. Antiguos funcionarios y familiares de PPLs describieron casos de presos que fueron plaqueados a la fuerza, lo que es esencialmente una forma de reclutamiento, pero en la práctica no parece ser común.

Cuando estos reclutas son liberados, se integran en las redes de bandas externas. Sin embargo, la principal fuente de reclutas de los combos son los jóvenes —a menudo menores de edad— de las comunidades bajo su control.

Según el comandante de Los Lobos, las mafias reclutan en colegios y lugares donde se reúnen niños, como campos de fútbol o playas. También utilizan ganchos culturales, especialmente la música. Las mafias patrocinan o incluso producen directamente música que promueve la vida de las bandas y la utilizan como herramienta común para el reclutamiento y para inculcar un sentimiento de identidad compartida. La mayoría de los jóvenes reclutados proceden de zonas económicamente desfavorecidas, con pocas perspectivas y oportunidades, y se dejan seducir por las promesas de la vida en banda.

“Como son jóvenes, buscan tener el nombre, el respaldo y la fama. Que sea el temido del barrio y el más llamativo de la fiesta”, dijo el comandante de Los Choneros.

Sin embargo, en algunas zonas, las mafias también practican el reclutamiento forzoso. InSight Crime ha documentado casos —sobre todo en territorios en disputa y muy conflictivos— de mafias que amenazan e incluso atacan no solo a sus objetivos, sino también a sus seres queridos, lo que provoca el desplazamiento de familias enteras.

Aunque la mayoría de los reclutas son hombres, algunas células tienen un alto porcentaje de reclutas femeninas. Esto es especialmente cierto en el caso de Los Lobos de Quito, según el comandante de Los Lobos. Informó de que existe un equilibrio de género casi igualitario en la composición de los combos bajo su mando, así como la presencia de mujeres poderosas en puestos de liderazgo de



alto rango a nivel de jefe de zona. Añadió que hay algunos combos dirigidos por mujeres y compuestos en su totalidad por ellas. Sin embargo, en algunas zonas, InSight Crime ha recibido informes de bandas que atraen a mujeres no como miembros, sino para abusar sexualmente de ellas o explotarlas.

Al igual que en las prisiones, los reclutas suelen empezar desde abajo, como vigías o mensajeros, antes de que se les asignen trabajos de mayor responsabilidad, como la distribución de drogas o el cobro de extorsiones. Según fuentes del hampa e [informes de medios de comunicación](#), a veces se selecciona a los más aptos a una edad temprana para moldearlos como sicarios, en algunos casos participando en programas de formación en las llamadas “escuelas de sicarios”.

Manteniendo el control

Además de protegerse de sus rivales y reforzar sus filas, las mafias también mantienen su dominio sobre los territorios mediante el control social. Las relaciones tanto con las comunidades como con la población reclusa y las funciones sociales y de gobierno de las bandas varían en función de una serie de factores, como qué mafia y qué mandos tienen el control, el historial de la banda en el territorio y el nivel de competencia y conflicto al que se enfrenta.

En la mayoría de los casos, cuanto más disputado es el territorio — independientemente de si está dentro o fuera de las prisiones—, más brutal es el control de las bandas. Y las zonas en las que están más arraigadas son aquellas en las que tienen mayor influencia y control social. Sin embargo, la forma más común de control mafioso se basa más en relaciones depredadoras y explotadoras que en una forma de contrato social.

En las prisiones, el ambiente más duro se vive, con diferencia, en la mayor y más disputada cárcel de Ecuador, Litoral. Las PPLs en los sitios que actúan como cuarteles generales de la mafia, como La Regional y Latacunga, informan de métodos mucho menos violentos y abusivos para imponer el control. Las normas impuestas se basan en gran medida en mantener el orden y proteger los intereses económicos de la banda. Atacar a otros presos o a los funcionarios de prisiones —lo que se conoce como activarse— está prohibido sin el permiso de la banda. También se castiga el impago de deudas. Pero los ex-presos informaron de pocas normas más para la población general, aunque las mafias pueden tener sus propios reglamentos internos para los miembros. El castigo más habitual por incumplir las normas es el ingreso en celdas de castigo —a menudo las celdas de detención o las celdas utilizadas para las visitas conyugales—, donde los presos suelen permanecer aislados o en condiciones de hacinamiento.



“El peor castigo es estar encerrado en una íntima [celda de castigo], sin comer, sin luz y sin poder asearte”, dijo un ex-presos de un pabellón de Litoral controlado por Las Águilas.

Aunque la mayoría permanece en las celdas de castigo durante unos días, los ex reclusos denuncian que hay personas que permanecen allí durante meses. Las palizas también son comunes en Litoral, pero menos en los bastiones criminales de La Regional y Latacunga, donde los ex detenidos afirman que son poco frecuentes.

En algunas prisiones, sobre todo en La Regional, controlada por Los Choneros, los jefes mafiosos pueden celebrar “audiencias” para resolver conflictos o castigar transgresiones. Pero en la mayoría de los casos, y especialmente en Litoral, las PPLs describen una resolución de conflictos mucho más arbitraria y a veces brutal por parte de los comandantes, y un ex recluso incluso describe cómo se ordenó a dos presos en una disputa que se pelearan para entretenimiento del comandante.

Mientras que las PPLs representan para las mafias un recurso a explotar y una población a controlar, sus relaciones con las comunidades del exterior son más complejas. Dichas comunidades pueden representar una base de clientes para las drogas o víctimas potenciales de extorsión, pero también pueden representar una reserva de reclutamiento, una red de inteligencia y, en algunos casos, una base social.

La legitimidad social de las mafias suele ser más profunda en las zonas donde los grupos tienen raíces históricas. En estos territorios, las mafias suelen prohibir las actividades criminales depredadoras, como los robos y la extorsión a pequeñas empresas y particulares, y también pueden asumir diversas funciones de gobierno, como financiar actividades culturales comunitarias, ofrecer apoyo económico o logístico a los residentes necesitados y asumir la responsabilidad de la seguridad ciudadana.

“Cada jefe de zona tiene que establecer eso. La seguridad de la zona le compete a uno y velar por el bienestar de las familias de allí”, dijo el comandante de Los Choneros. “También somos mediadores para la paz. Si hay un problema, nos involucramos para poner fin a cualquier conflicto”.

Sin embargo, como estas responsabilidades se delegan en los jefes de barrio, las órdenes de arriba no siempre se respetan, añadió la fuente.

Incluso se han dado casos de mafias que han creado fundaciones sociales. Los Tiguerones, en su territorio natal de Esmeraldas, [crearon una asociación](#) para formar a jóvenes como soldados. Según una líderesa social, también



financian la educación superior y las aspiraciones profesionales de los jóvenes de sus comunidades, a menudo como parte de una estrategia más profunda de fortalecimiento del alcance y la capacidad de la organización.

“Pagarán toda tu formación profesional. Pero, obviamente, después tendrás que pagar, es decir, serás un profesional del crimen organizado”, dijo el dirigente.

Sin embargo, para la mayoría de los que viven en comunidades controladas por la mafia, los jefes de barrio locales dirigen operaciones depredadoras con escasa preocupación por cualquier función social, según residentes, líderes comunitarios, y miembros de la bandas. Como informó el comandante de Los Lobos en Quito, puede que se les reconozca como autoridades de facto a las que se puede pedir ayuda, pero cualquier ayuda que proporcionen vendrá con la expectativa de que se les devuelva.

“El man [líder] da la mano, pero todo tiene un precio”, dijo.

Incluso en las zonas donde las mafias desempeñan un papel poco relevante, los líderes comunitarios describen cómo mantienen un diálogo con las bandas para mantener la paz, aunque este proceso suele complicarse por las sospechas de las bandas de que los líderes pueden ser informadores o colaborar con las autoridades. En estos casos, la cooperación de la comunidad con la banda se debe más al miedo y a una actitud de más vale malo conocido que a la legitimidad social, afirman los líderes.

Aunque los fuertes lazos sociales ofrecen otra capa de protección tanto contra los rivales como contra las fuerzas de seguridad, las bandas pueden buscar esos beneficios en lugares donde no pueden contar con la mayoría de la comunidad explotando a los residentes más vulnerables. La policía de Guayaquil, por ejemplo, informa de cómo las bandas utilizan a los adictos que les compran la droga para que les informen de los movimientos de las fuerzas de seguridad y de cualquier agente desconocido o sospechoso que entre o salga de los barrios.

El control de los barrios por las bandas puede incluso moldear los espacios físicos. En el territorio clave del narcotráfico de Los Esteros, en Guayaquil, por ejemplo, las bandas erigen sus propios badenes rudimentarios que pueden ser atravesados fácilmente por motocicletas pero que ralentizan a los coches de policía. También instalan sus propias cámaras de videovigilancia en lugares clave e incluso cierran calles enteras con vallas metálicas, por las que solo se puede pasar a través de puertas cerradas.⁴

4 Los residentes también lo hacen como medida de seguridad

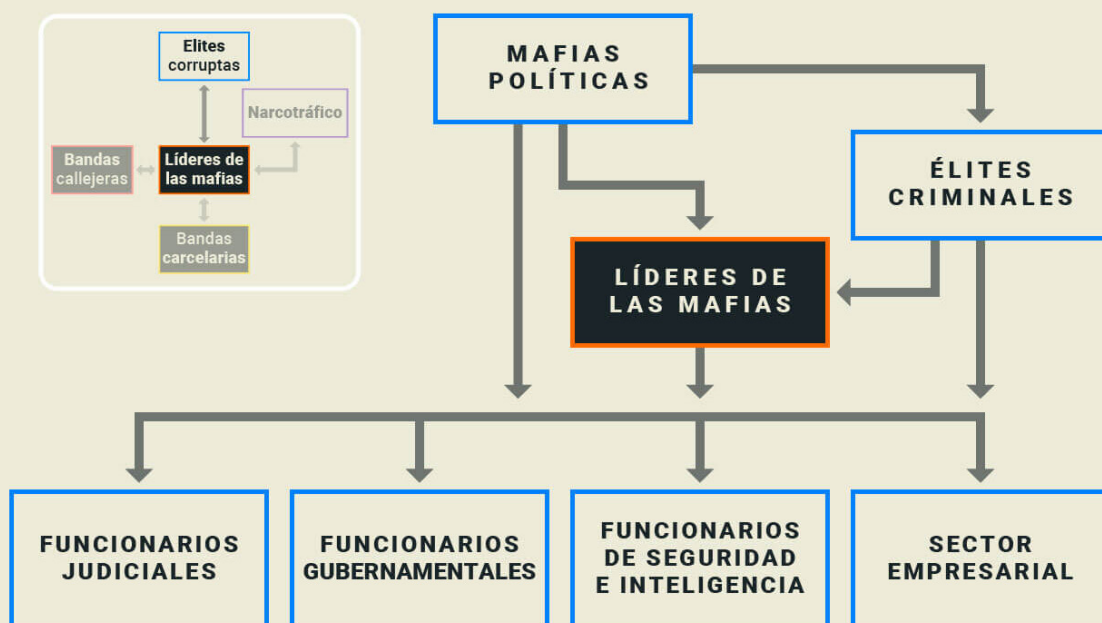


La corrupción y las relaciones estatales

La relación entre las mafias y el Estado es compleja y polifacética. A menudo se basa en la lógica clásica del crimen organizado de “plata o plomo”, la bala o el soborno. Sin embargo, hay pruebas de que en muchos casos la relación se basa mucho más en los beneficios mutuos, y que en algunos casos las mafias están incluso subordinadas a élites políticas y empresariales con enorme poder e influencia.

ÉLITES CORRUPTAS

Noviembre 2024 | Fuente: Trabajo de campo de InSight Crime



insightcrime.org

“La vinculación del crimen organizado no tiene límites. Su forma de neutralizar es cooptar todos los espacios en los que faciliten sus actividades”, dijo el fiscal. “Esta es la lógica, y eso pasa en todo el Estado”.

Dentro de las prisiones, el enfoque de plata o plomo ha sido fundamental para permitir a las mafias establecer y mantener su dominio sobre las prisiones. Y aunque esto fue interrumpido por la intervención militar de 2024, ya ha habido casos que indican que están utilizando ambos métodos para intentar restablecer su control.



La mayoría de los guardias, directores y otros funcionarios, que a menudo están mal pagados y trabajan en condiciones peligrosas y difíciles, aceptan de buen grado las sumas de dinero que se les ofrecen, que a veces les cambian la vida. Varios ex directores de prisiones informaron de que la mayoría de los guardias de prisiones están en nómina de las mafias, y algunos se acercan tanto que se les considera miembros de facto de las bandas. Como se analiza en uno de los estudios de caso de este informe, una de las mafias más importantes, Los Tiguerones, está incluso dirigida por un antiguo funcionario de prisiones. Pero, acepten o no el dinero que se les ofrece, los funcionarios saben que enfrentarse a las bandas les pondría en la línea de fuego.

Algunos antiguos directores que hablaron con InSight Crime afirmaron haber sido capaces de establecer relaciones de respeto mutuo con las mafias. Los directores no facilitaban activamente las actividades de las bandas y bloqueaban las acciones que consideraban que habían traspasado ciertas líneas, pero sin amenazar nunca el control general y la libertad de actuación de las bandas. A cambio, las bandas se aseguraban de ser tratadas con respeto y de que los presos no intentaran fugarse.

Sin embargo, los directores, e incluso los guardias, que adoptan cualquier tipo de postura contra las mafias suelen enfrentarse a amenazas y violencia. En los últimos 20 años, al menos siete directores de prisiones han sido asesinados, tres solo en 2024. Varios otros han sufrido atentados contra su vida.

La influencia de las mafias en las relaciones con el Estado para mantener el control de las prisiones ha ido mucho más allá de los muros de los centros penitenciarios. Los antiguos directores de prisiones informaron de su impotencia a la hora de intervenir para romper el control de las mafias sobre el poder o desbaratar sus economías, no solo debido a la corrupción casi total de su personal, sino también al bloqueo de las autoridades superiores.

“No teníamos ningún apoyo, los funcionarios eran corruptos, los guardias de prisiones eran corruptos, la policía era corrupta”, dijo un ex director de prisiones de Guayaquil.

Otro antiguo director informó de que un ministro del gobierno y un alto mando de las fuerzas de seguridad intervinieron directamente cuando intentaron imponer restricciones a las actividades de un líder mafioso. La misma fuente también informó de que sus peticiones de operaciones de seguridad para acabar con el control de la mafia sobre la prisión fueron rechazadas.

Sin embargo, las pruebas más contundentes de connivencia al más alto nivel surgieron durante el caso de corrupción [Metástasis](#), en el que el ex jefe del SNAI y posteriormente jefe de la unidad antinarcóticos de la policía, [Pablo Ramírez](#),



fue detenido en 2023 acusado de crimen organizado. Según las acusaciones, que se basaban en comunicaciones obtenidas de Leandro Norero, Ramírez mantenía una comunicación directa con Norero, proporcionándole protección, facilitando sus actividades criminales, concediéndole privilegios ilegales dentro de la prisión, haciéndole favores institucionales dentro del SNAI e incluso interviniendo en audiencias judiciales en nombre de la hermana de Norero.

Además, las agencias de inteligencia, sobre todo la UIP, siguen desempeñando un papel controvertido en las prisiones. Este papel se sitúa fuera del paradigma plata o plomo, según varios antiguos funcionarios de prisiones, expertos , y fuentes criminales. Estas fuentes alegan que los agentes de inteligencia mantienen líneas directas de comunicación con los líderes mafiosos. Los actores criminales pasan a los agentes información para debilitar a sus rivales o a cambio de facilitar sus actividades, lo que permite a los agentes de inteligencia mostrar resultados en su trabajo.

Documentos judiciales e investigaciones internas han mostrado atisbos de esta dinámica en acción. En un caso, se documentó que el líder mafioso El Cubano pasaba información sobre alijos de armas a agentes de inteligencia. Mientras tanto, en otro, se descubrió que un funcionario operaba con un nombre falso, introducía teléfonos celulares en la cárcel e intentaba urdir traslados de sospechosos, entre los que se encontraba una de las figuras más importantes de Los Tiguerones.

Fuera de las prisiones, los líderes de la mafia consultados por InSight Crime informan que sus organizaciones mantienen amplias redes de corrupción que penetran en una gran variedad de instituciones estatales a todos los niveles. Estas redes son más evidentes en la aplicación de la ley y el sector judicial, pero también incluyen las ramas política y administrativa del Estado.

“Tenemos abogados, jueces, fiscales, policías de inteligencia, manes que, cuando escuchan tu nombre, te van llamando y te dicen ‘escóndete, no aparezcas un tiempo’”, dijo el jefe de barrio de Lobos.

El principal papel de los funcionarios de seguridad corruptos es proporcionar información de inteligencia para facilitar las actividades de la mafia, avisándoles de las operaciones, investigaciones, movimientos y actividades de las fuerzas de seguridad o de sus rivales. Sin embargo, también se han dado casos de funcionarios de seguridad que han desempeñado un papel mucho más directo en el transporte y la protección de cargamentos de droga e incluso en la ejecución de asesinatos.



Por su parte, el sector judicial ecuatoriano, notoriamente corrupto, es utilizado para obtener fallos favorables en temas como procesamientos y sentencias, concesión de libertades anticipadas y traslados de prisión. Metástasis y [otras investigaciones](#) sobre estos casos han revelado cómo las mafias utilizan complejas redes de abogados, funcionarios judiciales y empresarios que actúan como intermediarios para negociar estos acuerdos.

Las mafias también han cooptado a líderes políticos locales y nacionales. [Los políticos locales](#) de las zonas controladas por las bandas pueden proteger y facilitar las actividades de la mafia, así como concederles acceso a fuentes de ingresos como contratos públicos y puestos clave en los gobiernos locales. A cambio, las mafias pueden contribuir a la financiación de campañas, entregar votos o simplemente pagar sobornos.

La corrupción a este nivel también puede seguir la lógica de plata o plomo, con jueces, fiscales, candidatos políticos y funcionarios en ejercicio, todos ellos [agresivamente perseguidos por las bandas](#). Sin embargo, criminales, fuerzas de seguridad y de inteligencia y fuentes gubernamentales de alto rango insisten en que los lazos entre las mafias y los actores corruptos se extienden mucho más arriba, y más profundamente, y que, en los niveles superiores, la dinámica de poder cambia: Las mafias actúan al servicio de las redes de corrupción.

“El crimen organizado es una triple estructura: una estructura política, que lo controla todo, una estructura empresarial corrupta y una estructura criminal violenta”, afirmó un ex ministro del gobierno.

Aunque las investigaciones periodísticas y las causas penales han ofrecido atisbos de esas redes y pruebas circunstanciales de tales operaciones, estas fuentes insisten en que se trata solo de la punta del iceberg.



5

Desde la intervención: ¿Un nuevo comienzo o un nuevo ciclo de criminalidad?



El despliegue de las fuerzas armadas en las prisiones y en las calles en enero de 2024 causó una alteración sin precedentes en la dinámica criminal de Ecuador. Pero el enfoque militarizado ha estado acompañado de violaciones generalizadas de los derechos humanos y también ha producido resultados cuestionables. Y mientras la política del gobierno parece estancada a medida que se acercan las nuevas elecciones presidenciales, ya hay indicios de que está surgiendo un nuevo orden criminal y de que el Estado está perdiendo el control del sistema.



*Los militares fueron desplegados en las cárceles de Ecuador en enero de 2024.
Crédito: AP*

La oleada inicial de despliegues militares tuvo como objetivo restablecer el orden, sobre todo en las prisiones, donde en muchas instalaciones las mafias se habían amotinado y habían tomado como rehenes a guardias y otros funcionarios. En las semanas siguientes, los soldados trasladaron a altos mandos de las bandas a la prisión de máxima seguridad de La Roca, y

sin descanso buscaron alijos de armas, drogas, equipos de comunicaciones y otros artículos de contrabando. Durante las intervenciones, se mantuvieron a las personas privadas de libertad (PPLs) encerradas por casi 24 horas al día, y solo les permitían salir de sus celdas para comer o asearse.

La intervención en las cárceles estuvo acompañada de importantes despliegues militares y policiales en las calles. Funcionarios de seguridad que hablaron con InSight Crime en zonas clave como Guayaquil y Esmeraldas describieron un aumento de las incautaciones de drogas y las detenciones. Solo en los dos primeros meses del despliegue militar, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 13.000 personas, [según estadísticas del gobierno](#).

Tanto los funcionarios de seguridad como los líderes de las bandas consultados por InSight Crime confirmaron que la intervención desbarató los vínculos entre los líderes de las prisiones y las bandas en las calles, y la policía afirmó que los comandantes fuera de las cárceles se habían escondido. Además, se [detuvo](#) a varios altos dirigentes de las mafias que se habían fugado o sobre los que pesaban órdenes de detención. El número de asesinatos se redujo a la mitad entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Pero pronto se hizo evidente que lo que se ganaba tenía un precio alto. Según los testimonios de PPLs, familiares, abogados y defensores de los derechos humanos [recogidos por InSight Crime](#), los militares maltrataron, golpearon e incluso torturaron a los presos, estuvieran o no afiliados a bandas, y les privaron de derechos básicos como la representación legal y el acceso a una alimentación y una atención sanitaria adecuadas. Entre el inicio de la intervención y noviembre de 2024, observadores de derechos humanos ecuatorianos documentaron 76 muertes en las cárceles.



Fuera de las prisiones, las fuerzas de seguridad han sido acusadas de maltratar a las comunidades locales y de cometer graves abusos contra los derechos humanos, y [Human Rights Watch](#), [defensores locales de los derechos humanos](#) e [investigaciones de medios de comunicación](#) han documentado casos de presuntas torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

“Ha habido sinnúmero de violaciones y violencia estatal”, dijo un activista de derechos humanos en Esmeraldas. Según el activista, las familias de las víctimas y quienes documentan los supuestos abusos han recibido llamadas telefónicas y mensajes de texto amenazantes.

Además, cuanto más ha durado el despliegue, menos creíbles han parecido sus resultados.

Dentro de las prisiones, ha habido indicios de que las mafias tratan de restablecer sus operaciones, reafirmar su influencia y reformar sus redes de corrupción.

De hecho, desde el principio de la intervención, ha habido crecientes indicios de corrupción entre los funcionarios militares desplegados en las prisiones. Se sigue descubriendo contrabando de armas, teléfonos celulares, drogas y alcohol dentro de las prisiones, y se ha detenido a soldados que introducían estos artículos de contrabando. Los expertos afirman que cuanto más tiempo permanezcan los militares en las prisiones, mayor será el riesgo de que sean corrompidos por el negocio penitenciario.

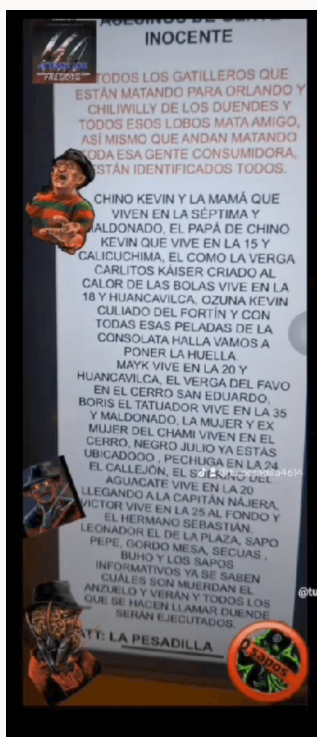
“Hay una ligera impresión de control, pero en realidad, ¿hasta qué punto podemos decir que es un control si cada semana sigue habiendo drogas, si cada semana sigue habiendo armas? ¿entonces hay control o es un show mediático para los ciudadanos?”, dijo un exfuncionario de la asesoría jurídica del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

El SNAI también sigue contaminado. Hay pruebas, por ejemplo, de que agentes corruptos del SNAI siguen colaborando con las mafias, incluso presuntamente ayudando a [fugas de las cárceles](#). Y, sin embargo, todavía no se han hecho esfuerzos serios para limpiar la agencia.

“Se va a contaminar”, dijo un exfuncionario que investigó el sistema penitenciario para el Congreso. “Los mismos funcionarios corruptos no se han depurado, y nadie está dispuesto a dar la batalla porque está tan permeada y naturalizada esa corrupción”.



Pero la corrupción es solo un elemento de los grupos criminales que buscan reafirmar el control. Dos meses después del inicio de las intervenciones, estallaron **disturbios** en Litoral, que dejaron al menos seis muertos. Los informes señalaban disparos e incendios en el interior del centro penitenciario, donde los presos protestaban contra el régimen militar. Otros levantamientos en las prisiones de Los Ríos y Jipijapa dejaron varios reclusos heridos.



Una amenaza que circuló después de la masacre

Entre abril y septiembre, **fueron asesinados tres directores de prisiones**, entre ellos los directores de Litoral y Rodeo, una fortaleza de Los Choneros. Los guardias de las prisiones y otros funcionarios del SNAI también han sido **atacados y asesinados**. En septiembre, La Roca fue atacada con un dron cargado de explosivos, que destruyó parte del tejado.

Las tensiones latentes estallaron en noviembre, cuando un enfrentamiento entre bandas en la prisión de Litoral dejó al menos 17 muertos y 15 heridos, según autoridades carcelarias. Las imágenes de la masacre que circularon después hicieron eco de la violencia más brutal de masacres anteriores, mostrando cabezas decapitadas y cuerpos mutilados.

Los informes preliminares sobre la masacre **la atribuyeron a una disputa** sobre la distribución de alimentos, lo que sugiere que las bandas han restablecido el control suficiente para convertir de nuevo la prestación de servicios básicos en una

economía criminal. Y la matanza se llevó a cabo con armas de fuego y armas blancas, lo que demuestra que se están rearmando con éxito.

Sin embargo, la masacre también mostró signos de una nueva dinámica. **Reportes de medios de comunicación** afirmaban que los enfrentamientos involucraban a cuatro grupos organizados en dos alianzas, todos presentes en un pabellón de Litoral que solía estar bajo el control de una facción de Los Choneros, Los Águilas. Aunque estos grupos más pequeños tienen conexiones históricas con las mafias carcelarias más grandes, ahora parecen estar en disputa entre ellos. Estos nuevos conflictos en las cárceles parecen estar trasladándose de nuevo a las calles. En los días que siguieron a la masacre, medios locales reportaron una **ola de asesinatos** y un **atentado con explosivos** en Guayaquil, que estuvo acompañado de mensajes que prometían represalias contra el líder de la banda que estaba presuntamente detrás de los asesinatos en la cárcel.



También fuera de las prisiones, las supuestas mejoras de seguridad de la represión inicial empiezan a parecer cada vez más ilusorias.

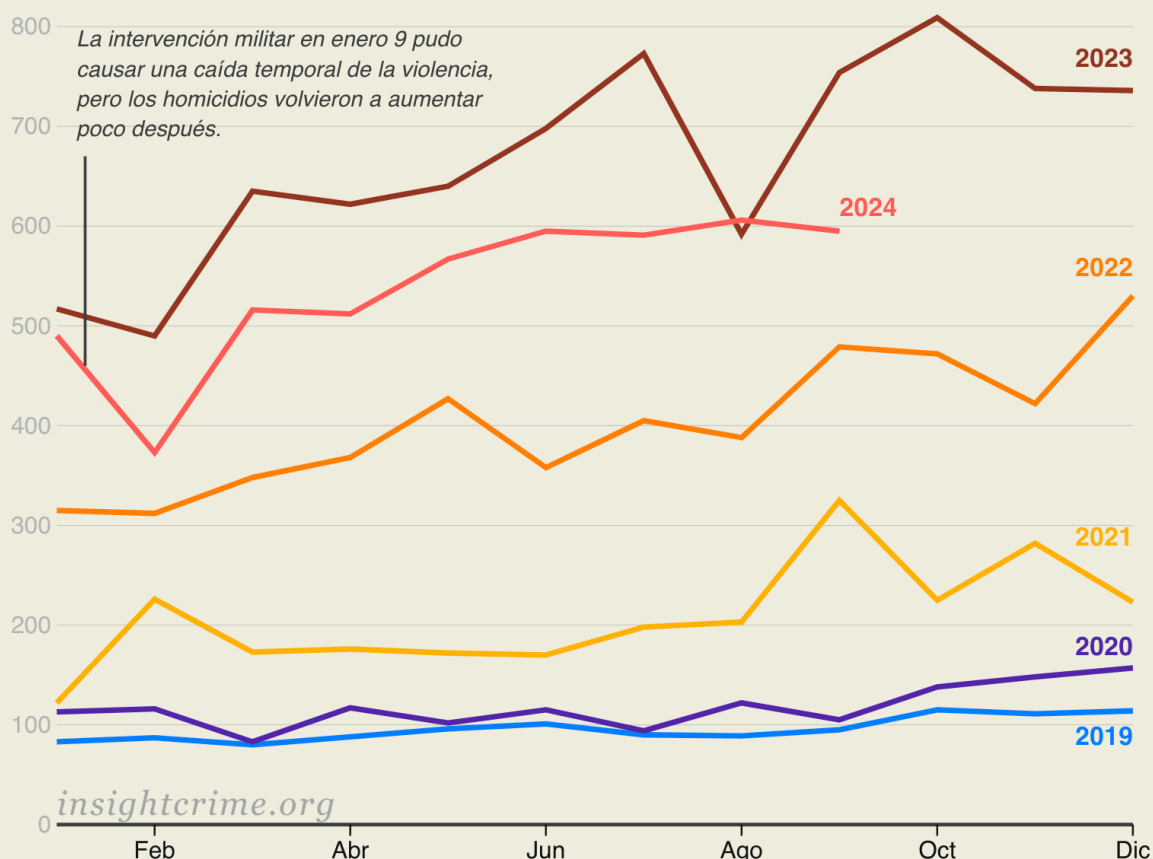
Han surgido dudas sobre qué ha ocurrido con los miles de presuntos miembros de bandas que han sido detenidos. Las estadísticas oficiales muestran que entre el inicio del régimen de excepción y el final de septiembre de 2024, la población carcelaria aumentó en casi 3.000 personas. Los detenidos en prisión preventiva, donde probablemente figurarían los presuntos miembros de bandas en las estadísticas, representan menos de la mitad de esa cifra.

Según un informe de [Human Rights Watch](#) —del que hicieron eco activistas locales de derechos humanos que hablaron con InSight Crime— muchos de los detenidos nunca son acusados ni siquiera interrogados. En lugar de ello, en muchos casos, la policía y el ejército se limitan a detenerlos extrajudicialmente durante breves períodos, los golpean y los someten a tratos degradantes, para luego dejarlos en libertad.

Las tasas de homicidios en Ecuador cayeron luego de la intervención militar en enero, pero han aumentado constantemente desde entonces

Homicidios mensuales en Ecuador

Noviembre 2024 | Fuente: Ministerio del Interior de Ecuador y Observatorio Ecuatoriano de crimen organizado: OEEO





Además, las tasas de homicidio se han repuntado, alcanzando niveles que, aunque siguen por debajo de los máximos de 2023, son superiores a los de cualquier otro año registrado. Por su parte, las denuncias de delitos depredadores, como la extorsión, han **aumentado considerablemente**. Es probable que estos aumentos estén relacionados con una consecuencia imprevista de la intervención: la aceleración de la tendencia existente hacia la atomización de las mafias.

Fuentes de seguridad, judiciales y criminales describieron cómo, a nivel de barrio, las bandas callejeras muestran ahora poca lealtad a los jefes de las mafias y cambian con frecuencia de red. El debilitamiento de los lazos de liderazgo también ha propiciado la aparición de grupos disidentes, que han dado la espalda a sus antiguos financiadores. El resultado ha sido un mapa criminal cada vez más fracturado y fragmentado, integrado por grupos más pequeños que se disputan violentamente los territorios y que se han fortalecido reclutando y aprovechándose de las comunidades que ocupan.

“Se va fragmentando por la necesidad de poder que tiene cada uno. Por eso la multiplicidad y la expansión de estos grupos criminales”, dijo un fiscal especializado en crimen organizado.

Mientras tanto, el gobierno ha dado pocas señales de una estrategia que vaya más allá de la represión militar inicial. En abril, se celebró una consulta popular y referendo en el que **los votantes aprobaron** medidas respecto al uso de los militares para hacer cumplir la ley, junto con planes para aumentar las penas por determinados delitos, restringir los programas de libertad anticipada y permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos.

“Seguimos con las mismas políticas, no solo de los últimos dos o tres años, sino de los últimos 20 años en este país: aumento de las condenas y aumento de la represión”, dijo el exfuncionario de la asesoría jurídica del SNAI.

En junio, el gobierno retomó otra política pasada de centrarse en nuevas infraestructuras cuando **inició la construcción** de una nueva prisión de máxima seguridad en Santa Elena diseñada para albergar a 800 de los presos más peligrosos y de alto perfil del país.

Sin embargo, con el ejército aún desplegado en las prisiones casi un año después de la operación inicial y las nuevas elecciones presidenciales previstas para febrero de 2025, el gobierno aún no ha ofrecido ninguna estrategia a largo plazo ni propuestas de reforma que aborden la corrupción sistémica y las debilidades institucionales que subyacen a la crisis penitenciaria y sus repercusiones en la seguridad ciudadana.

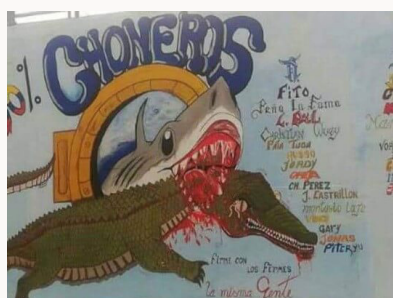


6

Perfiles Criminales



Los Choneros



Los Choneros son los pioneros del modelo de mafia carcelaria del crimen organizado que ha surgido para dominar el mundo criminal ecuatoriano. Han sido uno de los principales protagonistas de la violencia que ha desestabilizado el país en los últimos años y, aunque han perdido mucho poder e influencia desde su apogeo, siguen siendo uno de los grupos criminales más destacados de Ecuador.



Los Choneros toman su nombre de la ciudad manabita de Chone, donde empezaron a operar en la década de 1990 bajo el liderazgo de Jorge Bismarck Véliz España, alias “Teniente España”. La banda se expandió a la cercana ciudad de Manta, donde llevó a cabo robos, secuestros y asesinatos, y organizó redes de microtráfico y extorsión.

En 2011, el liderazgo había pasado a Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, ayudado por su principal lugarteniente, José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Ambos fueron detenidos por asesinato ese mismo año, pero esto solo sirvió para que las bandas se reformaran y evolucionaran dentro del sistema penitenciario.

Conocido tanto por su inteligencia y carisma como por su uso de la violencia, Rasquiña reclutó a bandas de atracadores de bancos, extorsionadores y microtraficantes, así como a facciones de bandas juveniles como los Ñetas, Los Latin Kings y Los Vatos Locos, construyendo una federación de organizaciones más pequeñas que se unieron bajo la bandera de Los Choneros.

Rasquiña pudo utilizar esta federación no solo para asumir el poder dentro de las prisiones, sino también para expandirse por las calles de todo el país. Luego, contrató su nuevo ejército a élites criminales, incluidos narcotraficantes transnacionales, a los que proporcionó servicios logísticos y de seguridad.

En 2020, Rasquiña fue asesinado, seis meses después de conseguir su libertad anticipada. Esto desencadenó la ruptura de la federación, y las antiguas facciones de Los Choneros le dieron la espalda a Fito y lo que quedaba de la red. En la violencia que siguió, Los Choneros fueron responsables de algunos de los peores asesinatos en masa cometidos en las prisiones.

Aunque varias de estas facciones restablecieron posteriormente relaciones con Los Choneros, fue como aliados y no como subordinados. Además, su rival más poderoso, Los Lobos, se negó a negociar y su guerra mortal con Los Choneros continúa hoy.

Este periodo de fragmentación y alianzas fluctuantes ha dejado a Los Choneros sustancialmente más débiles y vulnerables. No obstante, siguen siendo una de las dos mafias más importantes de Ecuador, controlan el territorio dentro y fuera de las prisiones y actúan como un eslabón importante en la cadena transnacional de suministro de cocaína.



Los Lobos



En tan solo unos años, **Los Lobos** han pasado de ser un grupo disidente de Los Choneros a una de las organizaciones criminales más poderosas e innovadoras de Ecuador, con miles de miembros repartidos por todo el país y dentro de las prisiones.

Los Lobos surgieron de una banda de ladrones armados liderada por Wilmer Chavarría Barré, alias “Pipo”, que fue reclutada para unirse a Los Choneros. Tras el asesinato del líder de Los Choneros, Rasquiña, en 2020, Los Lobos lideraron una coalición disidente de antiguas facciones de Los Choneros que se autodenominó Nueva Generación. Junto con sus nuevos socios, incluidos Los Tiguerones y Los Chone Killers, el grupo emprendió una guerra contra el sucesor de Rasquiña, Fito, y lo que quedaba de Los Choneros.

En 2023, Fito había convencido a los socios de la Nueva Generación de Los Lobos para que se aliaran con Los Choneros, pero Los Lobos rechazaron violentamente los avances de Los Choneros. Desde entonces, Los Lobos han librado una guerra en varios frentes contra la nueva alianza.

Los Lobos también han estado supuestamente detrás de gran parte de la violencia política que ha desestabilizado a Ecuador. A finales de 2022, Los Lobos, junto con Los Tiguerones, estuvieron supuestamente detrás de una oleada de atentados terroristas en todo el país. Luego, en agosto de 2023, el candidato presidencial anticorrupción, Fernando Villavicencio, fue asesinado en un evento de campaña. Aunque los presuntos sicarios, que posteriormente fueron asesinados en prisión, eran colombianos, los fiscales creen que Los Lobos fueron los autores intelectuales del asesinato.

Durante todo este tiempo, Los Lobos se expandieron exponencialmente, se apoderaron de territorios y construyeron redes de bandas locales en zonas estratégicas alrededor de Ecuador. Estas redes se financian a través de la extorsión, el microtráfico, el secuestro, los robos y otros crímenes depredadores.

A lo largo de esta expansión, Los Lobos se establecieron como proveedores de servicios logísticos y de seguridad para las operaciones transnacionales de narcotráfico, y se cree que son uno de los principales subcontratistas de tráfico del Cartel Jalisco Nueva Generación (**CJNG**) de México. También son actores importantes en la industria minera del oro, a la que extorsionan y cooptan.



Además, se han trasladado a Quito, apoderándose de la riqueza de oportunidades criminales que ofrece la capital ecuatoriana y consolidando su posición como una de las redes de bandas más poderosas de Ecuador en la actualidad, si no la más poderosa.

La intervención militar en el sistema penitenciario en 2024 aisló a varios altos dirigentes de Los Lobos e interrumpió las comunicaciones entre la red externa del grupo y los comandantes en las prisiones. Si bien esto parece haber hecho poco para detener las actividades de Los Lobos en las calles, puede haber afectado a la unidad del grupo, con informes sobre la aparición de facciones disidentes en zonas importantes como Manabí y Machala.

Los Tiguerones



En pocos años, Los Tiguerones han pasado de las sombras a convertirse en una de las organizaciones criminales más peligrosas e influyentes de Ecuador y en un importante eslabón de la cadena de suministro del tráfico internacional de cocaína.

Los Tiguerones fueron formados por William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, o simplemente “Willy”, a finales de la década de 2010. En ese entonces, Willy era guardia penitenciario en Guayaquil, donde comenzó a traer contrabando para el líder de Los Choneros, Rasquiña.

Actuando como apoderados de Los Choneros, Los Tiguerones avanzaron en la ciudad natal de Willy, Esmeraldas, donde eliminaron rivales y acumularon territorio, y se posicionaron en la cima del mundo criminal de la ciudad.

Cuando el asesinato de Rasquiña a finales de 2020 provocó la ruptura de Los Choneros, Los Tiguerones se independizaron y se unieron a la Nueva Generación, junto con otras bandas como Los Lobos y Los Chone Killers. Durante el conflicto que siguió, Los Tiguerones estuvieron presuntamente implicados en el [peor incidente de violencia masiva de la historia de Ecuador](#), cuando al menos 119 presos murieron después de que la banda lanzara un intento fallido de tomar el control de un pabellón rival en la prisión de Litoral.

En 2023, sin embargo, Los Tiguerones volvieron a cambiar de bando. Establecieron una nueva alianza con Los Choneros y se disputaron territorios con Los Lobos, sobre todo en Esmeraldas, donde sus antiguos aliados lanzaron



una violenta campaña para tomar el control del bastión de Los Tiguerones. Los enfrentamientos que siguieron convirtieron a Esmeraldas en una de las ciudades más violentas de Ecuador.

Los Tiguerones también han estado implicados en algunos de los casos más notorios de mafias carcelarias que emplean tácticas de terror para presionar al Estado. En 2022, se creía que Los Tiguerones, junto con Los Lobos, estaban detrás de una **oleada de atentados** que incluían carros bomba y cuerpos colgados de puentes. Luego, en enero de 2024, cuando el nuevo presidente, Daniel Noboa, tomó medidas contra los principales jefes de la mafia en las prisiones, Los Tiguerones desempeñaron un papel central en otra ronda de **ataques coordinados**, supuestamente llevando a cabo la toma una estación de noticias de televisión en vivo que conmocionó al país y apareció en los titulares de todo el mundo.

Los Tiguerones se han visto muy afectados por las intervenciones militares en las calles y las prisiones en 2024, que han desbaratado sus redes al interior de las cárceles y su capacidad para coordinar actividades fuera de estas. También han ido perdiendo terreno frente a Los Lobos en el actual conflicto de Esmeraldas, y se ha informado de la aparición de grupos disidentes en Guayaquil. Su posición cada vez más precaria se debilitó aún más en octubre con la detención de Willy y su hermano en España.

Los Chone Killers



Los Chone Killers son un grupo mafioso localizado predominantemente en la ciudad de **Durán** y dentro de la prisión de Litoral.

Las raíces de Los Chone Killers se encuentran en la banda transnacional Los Ñetas, que se fragmentó tras participar en el proceso de pacificación de bandas del gobierno de Correa a finales de la década de 2000. En la década de 2010, el encarcelado líder

de una facción de los Ñetas en Durán llamada “Los Killers”, Terry Israel Camacho, alias “Trompudo”, fue reclutado por Los Choneros en prisión. Poco después, nacieron Los Chone Killers como un brazo armado de Los Choneros especializado en sicariato.



Fortalecidos por sus nuevas conexiones con Los Choneros en las cárceles, Los Chone Killers lanzaron **ataques mortales** en Durán en 2020, dirigidos contra la otra banda principal del municipio y archienemiga de los Ñetas, Los Latin Kings. Tras el asesinato del líder de Los Choneros, Rasquiña, el grupo se unió a la coalición disidente Nueva Generación con Los Lobos y Los Tiguerones, pero más tarde se volvería a alinear con Los Choneros. Sin embargo, a lo largo de este conflicto mafioso de mayor envergadura, el principal objetivo de Los Chone Killers ha seguido siendo la lucha contra Los Latin Kings, convirtiendo a Durán en una de las ciudades con más homicidios de América Latina en 2023.

Aunque sus actividades se centran en Durán, los capítulos de Los Chone Killers también operan en las ciudades cercanas de Guayaquil, Daule y Samborondón, donde dirigen economías criminales de bajo nivel y han penetrado los gobiernos municipales. **La ubicación estratégica de Durán** también significa que los capítulos están bien posicionados para actuar como proveedores de servicios para los narcotraficantes transnacionales, aunque algunas fuentes **cuestionaron** la participación de Los Chone Killers en la economía. Además, el grupo controló un pabellón en la cárcel Litoral hasta la intervención militar de 2024.

Desde 2023, Los Chone Killers se han definido cada vez más por las actividades de un **líder renegado**, Julio Alberto Martínez, alias “Negro Tulio”, que se ha distinguido del resto del grupo por su despiadada violencia. Las autoridades lo han vinculado en los asesinatos de al menos cuatro funcionarios públicos en Durán y Guayaquil en 2023 y 2024, entre ellos dos fiscales.

Aunque Negro Tulio fue **detenido** en mayo de 2024, las autoridades descubrieron que seguía **dirigiendo** su red de operativos en el gobierno municipal de Durán y sus instituciones adscritas desde Litoral. Sin embargo, con Negro Tulio en prisión y Los Chone Killers fragmentados, el liderazgo y la estructura actuales del grupo no están claros.

Los Latin Kings



Los Latin Kings ecuatorianos han pasado de ser una banda callejera juvenil a una formidable red mafiosa, aunque la difusa identidad de la banda es un punto de discordia entre sus miembros.

Los **Latin Kings** nacieron en Estados Unidos en la década de 1940, pero no llegaron a Ecuador hasta la década de 1990, después de que el gobierno



estadounidense empezara a deportar a los miembros de las bandas ex convictos a sus países de origen. Los deportados formaron secciones separadas en Quito y Guayaquil, sin que ninguna de ellas supiera de la existencia de la otra hasta más tarde, según relatos académicos sobre la banda. Aunque las facciones de las dos ciudades se han fusionado en una sola nación desde entonces, Los Latin Kings de Guayaquil siguieron siendo en su mayoría independientes de los de Quito.

Los Latin Kings de Ecuador se definen por su participación en el proceso de “pacificación” lanzado por el gobierno de Rafael Correa en 2007. Aunque muchos de sus miembros abandonaron la vida de banda, su estructura descentralizada hizo que la participación no fuera uniforme y que algunas facciones mantuvieran sus actividades criminales.

Cuando las mafias carcelarias empezaron a tomar forma en la década de 2010, los miembros de Los Latin Kings se vieron presionados para unirse a Los Choneros y a otras redes emergentes. Aunque algunos miembros se integraron en estas estructuras criminales más sofisticadas, otros se resistieron, armándose en defensa propia e incluso tomando el control de los pabellones penitenciarios y de las lucrativas economías criminales que albergaban.

Sin embargo, a principios de la década de 2020, el proceso de pacificación había fracasado y el grupo se vio atrapado en la creciente violencia carcelaria y asediado por mafias cada vez más poderosas. Cuando el principal líder de Los Latin Kings, Manuel Zúñiga, alias “King Majestic”, fue asesinado en mayo de 2022, el grupo quedó en modo de supervivencia.

En lugar de Majestic surgió Carlos Manuel Macías Saverio, alias “[King Diablo](#)”, un hombre fuerte de Durán que representaba un ala más criminal del grupo. Aunque no se había opuesto abiertamente al proceso de pacificación, Diablo se centró en construir su red criminal mientras intentaba sobrevivir a este entorno criminal mucho más competitivo. Desde 2023, Diablo ha liderado su facción en una despiadada guerra con Los Chone Killers por el control territorial en Durán.

Los Latin Kings, sin embargo, siguen siendo una red dispersa y diversa, con decenas de miles de miembros en secciones repartidas por todo el país. Muchas de estas facciones se han distanciado de Diablo y de sus actividades criminales.



Contenido relacionado

Explore la cobertura de InSight Crime sobre la crisis carcelaria y el crimen organizado en Ecuador

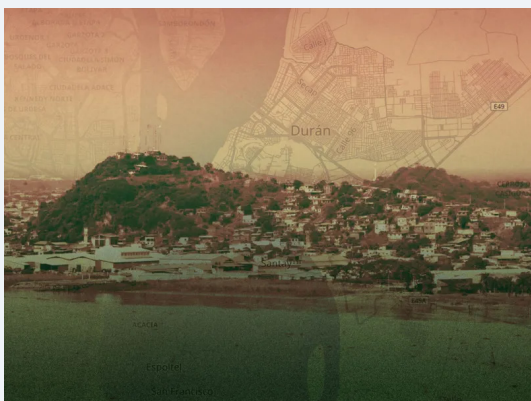


Masacre en cárcel de Ecuador evidencia acelerada evolución criminal

Guerra contra las pandillas de Ecuador / 28 Nov 2024

Una reciente masacre al interior de la prisión más violenta y más grande de Ecuador es una señal de que las múltiples organizaciones criminales del país se están atomizando a un ritmo acelerado ant

[Lea aquí >](#)



Durán: Una ventana a la explosión del crimen organizado en Ecuador

Ecuador / 26 Sep 2024

En 2023, Ecuador registró el año más sangriento de su historia.

[Lea aquí >](#)



Captura de líder de los Tiguerones de Ecuador podría fragmentar el grupo aún más

Cocaína / 23 Oct 2024

El líder de los Tiguerones, uno de los grupos más poderosos y violentos de Ecuador...

[Lea aquí >](#)



**InSight
Crime**

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
DEL CRIMEN ORGANIZADO

InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado. Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e instituciones — como una amalgama de medio periodístico, centro de pensamiento y recurso académico — con el fin de profundizar y orientar el debate sobre el crimen organizado en el continente americano. Los reportajes en terreno, la investigación minuciosa y las investigaciones de alto impacto han sido características distintivas de la organización desde sus inicios.

Para más información, visite insightcrime.org/es